LA CLASE DIRIGENTE

Carlos Real de Azúa



nuestra tierra 34

nuestra tierra 34

EDITORES:
DANIEL ALJANATI
MARIO BENEDETTO
HORACIO DE MARSILIO

ASESOR GENERAL:
Dr. RODOLFO V. TÁLICE

ASESOR EN CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS:
Prof. DANIEL VIDART

ASESOR EN CIENCIAS BIOLÓGICAS:
Dr. RODOLFO V. TÁLICE

ASESOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS:
Dr. JOSÉ CLAUDIO WILLIMAN h.

ASESOR EN CIENCIAS GEOGRÁFICAS:
Prof. GERMÁN WETTSTEIN

ASESOR EN CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS:
Prof. MARIO SAMBARINO

SECRETARIO DE REDACCIÓN:
JULIO ROSSIELLO

SECRETARIO GRÁFICO:
HORACIO AÑÓN

DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA:
AMÍLCAR M. PERSICHETTI

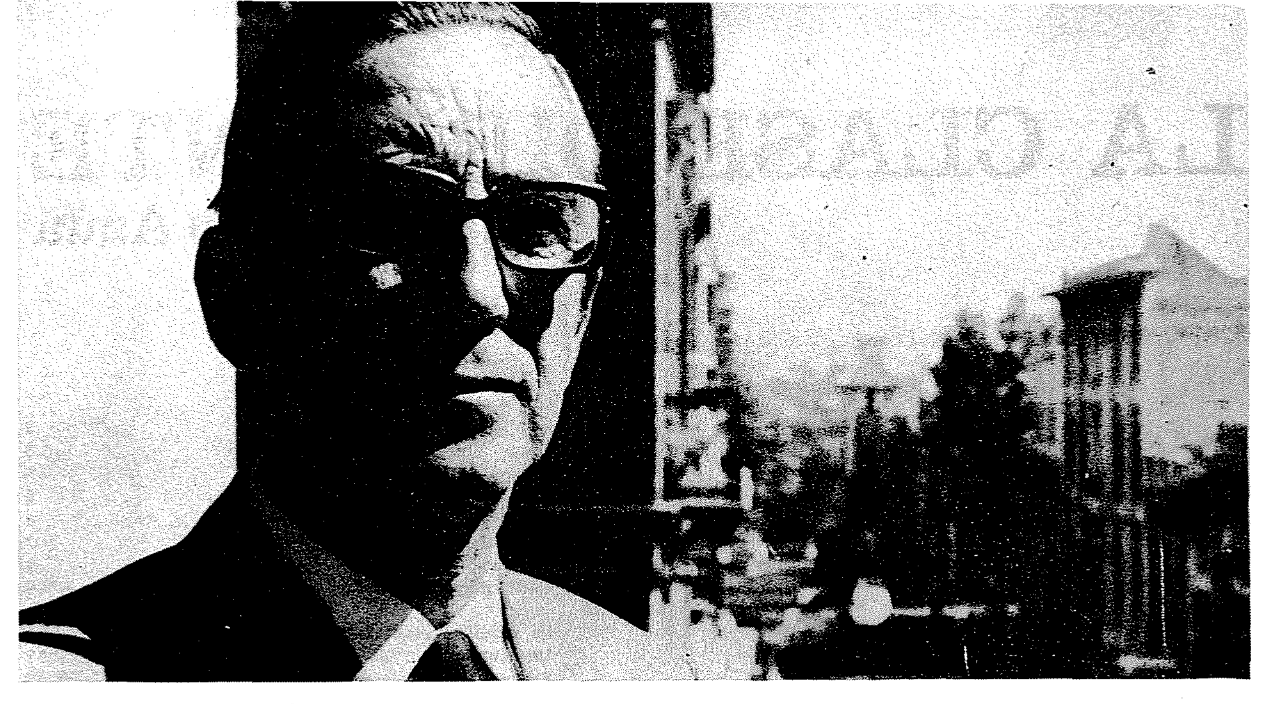
Distribuidor general: ALBE Soc. Com., Cerrito 566, esc. 2, tel. 8 56 92, Montevideo. Distribuidor para el interior, quioscos y venta callejera: Distribuidora Uruguaya de Diarios y Revistas, Ciudadela 1424, tel. 8 51 55, Montevideo.

LAS OPINIONES DE LOS AUTORES NO SON NECESARIAMENTE COMPARTIDAS POR LOS EDITORES Y LOS ASESORES.

Copyright 1969 - Editorial "Nuestra Tierra", Soriano 875, esc. 6, Montevideo. Impreso en Uruguay —Printed in Uruguay—. Hecho el depósito de ley. — Impreso en "Impresora REX S. A.", calle Gaboto 1525, Montevideo, diciembre de 1969. — Comisión del Papel: Edición amparada en el art. 79 de la ley 13.349.

LA CLASE DIRIGENTE

Carlos Real de Azúa



CARLOS REAL DE AZÚA nació en Montevideo en 1916 y concluyó en 1946 sus estudios de abogacía, profesión que no ejerce en la actualidad. Desde 1937 es profesor de Literatura en la enseñanza media y pertenece al plantel de docentes fundadores del Instituto de Profesores "Artigas". En 1967 conquistó en pruebas de oposición el curso de Ciencia Política en el Sector Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Su labor intelectual se ha enderezado simultáneamente pero sobre todo sucesivamente, hacia la crítica y la historia literarias, la historia cultural, política y social y la teoría política y social. Todas estas disciplinas, aunque no en forma exclusiva, centradas en el pasado y el presente del Uruguay, Latinoamérica y sus respectivas problemáticas. Además de una reiterada contribución a revistas y semanarios entre los que sobresale su colaboración en "Marcha", ha publicado "El Patriciado Uruguayo" (1961), "El impulso y su freno: tres décadas de batllismo" (1964), "Legitimidad, apoyo y poder político" (1969). Contienen estudios suyos los Cuadernos de Marcha números 1 (1967), 5 (1967) y 23 (1969): "El problema de la valoración de Rodó", "Bernardo Berro: un puritano en la tormenta" y "Ejército y política en el Uruguay", y los libros "Las democracias cristianas" (1968) y "La sociología subdesarrollante" (1969). Co-dirigió la serie "Capítulo Oriental" (1967-1968) en la que redactó siete entregas: "De los orígenes al 900", "Clasicistas y románticos", "Pensamiento y literatura en el siglo XIX", "Prosa del mirar y del vivir", "El Uruguay como reflexión" (I y II) y "Las biografías". Inició también la "Enciclopedia Uruguaya" con el estudio "Historia política" (Nº 1) y publicó igualmente en ella "Herrera: el nacionalismo agrario" (Nº 50). Ha desarrollado asimismo una persistente faena de antologista y prologuista, entre la que se destacan "Antología del ensayo uruguayo contemporáneo" (1964, 2 vol.) y sus introducciones, en la "Biblioteca Artigas-Colección de Clásicos Uruguayos", a "Motivos de Proteo" y "El Mirador de Próspero" de Rodó y a "Crítica y arte" y "Letras uruguayas" de Gustavo Gallinal.

EL TEMA

CLASES, ELITES Y PODER

Variada y llena de sobresaltos ha sido la historia de nuestro tema. Sucede que tal vez en ninguna otra cuestión central del pensamiento social y político la objetividad de la ciencia y los preconceptos de la ideología lidien con tanto encono. Con ninguna otra, tampoco, se eslabonan puntos tan decisivos como con ésta. Pues es la misma naturaleza de las clases sociales, del Estado, del poder económico, de la democracia, de la burocracia, de los "regímenes" político-sociales y sus límites y de media docena más de procesos de similar entidad los que están implicados en ella.

Con todo, aunque trabajosamente, la voluntad de ver lúcidamente siempre termina por abrirse paso en un mundo dominado por el prestigio del pensamiento científico. Pero tal victoria (y ésta es una de las varias paradojas de la cuestión) no es aquí la señal de vía libre en el tránsito hacia la verdad y el problema aun puede hacerse seriamente complicado. Porque si la "clase" es una categoría conceptual y una realidad (como tantas otras sociales) "inferible" pero no "perceptible", la clase o sector "dirigente" o "gobernante", como se verá, no es todavía "toda" (y en ocasiones no se origina enteramente en ella) la clase "alta" o "dominante", ni tampoco es el lote de "gobernantes" (políticos, estatales) perfecta y rápidamente identificables. En esta zona, el problema del "objeto" toca con el problema de la "prueba".

Sin espacio para dilucidar la razón del contacto, invoquemos sólo una convicción universal. Es sospechable que las decisiones políticas y sociales fundamentales se toman entre bastidores y entre unos pocos, que llegan prácticamente "cocinadas" a los cuerpos e instituciones que han de responsabilizarse de ellas y organizar su ejecución. Es sos-

pechable que en esas decisiones pesan, a veces de modo incontrastable, personas que no están investidas de ninguna función oficial o que, si lo están, actúan fuera de ésta. Es sospechable que hay "eminencias grises" y "chivos emisarios". Pero ¿quién lo verifica documentadamente, al nivel de rigor que la ciencia exige? Pues, como es obvio, los influyentes no dan la cara ni el debate de aquellas decisiones queda estampado en ningún acta ni, salvo raramente, los protagonistas brindan testimonio sobre el punto.

Supongamos salvados tales obstáculos, que al fin y al cabo se sitúan en el terreno del "método", esto es, de los modos de procedimiento para alcanzar la certeza. Debates más decisivos esperan en el nivel específico de la teoría.

Como ya se apuntaba de pasada, se abre una duda. ¿Forma una "clase" el conjunto de los que dirigen una sociedad, de los que la gobiernan efectivamente? Todo depende, como es fácil entenderlo, de la acepción que le demos al término "clase", de la teoría por la que optemos para explicar los procesos de diferenciación social que las determinan, de la importancia que le concedamos a la "función" de dirección social, del grado de dependencia o independencia respecto a la indescartable clase "alta", o "superior", o "dominante" con que veamos al lote de los que dirigen y gobiernan. ¿O es más bien una "élite" (difundido vocablo francés), una "selección", a la que se le despoje previamente del sentido encomiástico que lleva el término y con la que sólo se verifique los pocos que "están en la cosa", sin importar demasiado de dónde vengan ni a los intereses de qué capa social respondan?

Élite o clase (al final de esta excursión preliminar se estipulará un fallo revocable), ¿qué "fundamento" posee su superioridad? Hasta nuestro tiempo (caso de Mannheim y Ortega y Gasset) existen quienes han sostenido que ésta reside en que esos grupos asumen un *valor* ético-social decisivo y la legitimación de las viejas aristocracias no descansaba en otra cosa. Más modernas (aunque provienen del siglo XIX) son las doctrinas que basan la primacía en la aptitud para cumplir una *función,* esto es, un tipo de actividad necesaria a la subsistencia del conjunto. Desde los "industriales" de Saint-Simon hasta hoy se mantiene este punto de vista que no es inconciliable con el anterior —la "aptitud", la "eficiencia" son al cabo un valor— y cuyas consecuencias poco más adelante se verán. La más difundida de las justificaciones de la preeminencia de un núcleo minoritario decisivo es la del *poder.* ¿Son los modos de la "autoridad" y la "influencia", la facultad de determinar las conductas y los pensamientos de la gran mayoría el verdadero asiento de una clase o élite directoras de la sociedad? Fundado el poder, serían su titularidad, y el designio y/o la consecuencia inevitable de acrecentarlo, los que habilitarían al desempeño de las funciones sociales y políticas más cotizadas e influyentes, todo esto en un circuito cerrado y cada vez más corto.

Pero el poder, a su vez, tiene bases y estas bases son igualmente materia polémica. ¿Es la riqueza material, la propiedad de los bienes necesarios a la subsistencia de todos? O dicho de otra manera: ¿es la relación de supra y subordinación resultante de la estructura productiva misma? Parece la convicción más aceptable y es, efectivamente, la más aceptada. También parece que si se llega al poder social por otros medios (y ello es muy posible) sea en fortalecimiento económico que aquellos accedidos a él busquen estabilizar su situación. Pero se ha señalado muchas veces, a lo largo de la disputa, que la superioridad física armada ha sido una vía de acceso y que la irrupción al mando político de un grupo humano cualitativamente distinto al que



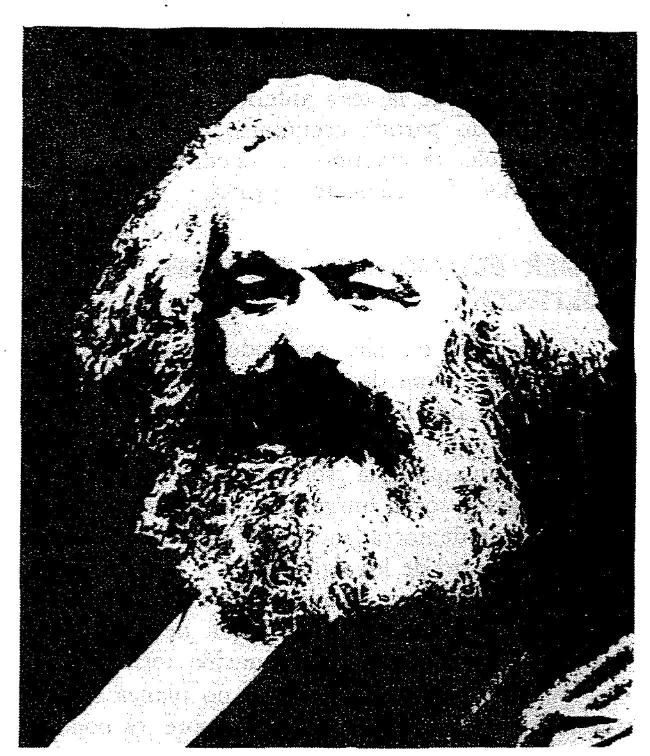
Jean Jacques Rousseau (1712-1788). En el rosado mañana democrático, vio como inexorable que los menos gobernaran a los más.

desplaza (o su instalación en un nuevo estado) representa otra forma de llegar. Y como a su vez los partidarios de la tesis anterior contesten desde qué punto de partida económico es esto normalmente posible, la cuestión no puede considerarse, como tantas, formalmente cerrada.

PODER ECONOMICO Y PODER POLITICO

Un aspecto de ella, con todo, exige inaplazablemente una toma de posición: es la relación entre el poder político y el poder económico y los titulares de uno y de otro. Los gestores formales del estado y su maquinaria ¿son sólo el "directorio" de la constelación social burguesa? ¿O, en especial tras el proceso de democratización política y social cumplido a lo largo de los siglos XIX y XX, esos gestores formales y esa maquinaria disponen de un radio de iniciativa, de un margen de autonomía inconciliables con una subordinación total?

Que el poder político estatal no planea majestuosamente —como el albatros— sobre los poderes sociales, que no es nunca "neutral", es una verdad que sólo algunos hipócritas controvierten. Que a nuestra altura histórica no es posible —salvo períodos breves de endurecimiento y violencia excepcionales— gobernar exclusivamente para los intereses de una reducida minoría, porque ello es contradictorio con la existencia misma de una sociedad viable y mínimamente consensual; que algún prorrateo entre las demandas de arriba y de abajo debe realizarse, que algún equilibrio o compromiso tácito tiene que lograrse es aserción menos aceptada pero bastante sólida. Con todo, la gran novedad y la variable decisiva está implicada en la ascensión a la calidad de un protagonista más, del propio Estado. O, digámoslo en concreto, de sus gestores estables (burocracia) y de su personal



Karl Marx (1818-1883). Una categoría simple y frontal: la clase dominante y un instrumento de ella, el Estado.

electivo y técnico. Difícil es que la expansión de una red institucional como la que el Estado representa no segregue intereses específicos de sus investidos y esta dificultad se acrecienta en un tipo histórico de Estado que tanto asume actividades económico-productivas de base como toma a su cargo el lote innumerable de "servicios" que constituyen, en parte, el "cuadro" de la producción y, en parte, una posición tan considerable de la producción misma como los "servicios" son.

PERMANENCIA Y CAMBIO DE ESTRUCTURAS

Todo lo anterior no anula la creencia de que allí donde existe un nivel dominante en la estructura social éste logra una influencia, incomparable con la de los otros niveles, sobre la iniciativa y la dirección de las grandes decisiones. Aceptado esto, bien pueden acogerse, en calidad de reservas, algunas insistencias de las corrientes sociológicas y politicológicas conservadoras, entre las que sobresale el aporte sutil pero últimamente frustráneo de Raymond Aron.

Es verdad que algunas doctrinas que enfatizan la concentración y aun el monopolio del poder, soslayan el hecho de que normalmente no existe pasividad en los medios dirigidos. Admisible también es la sospecha de que las mismas desmesuran la unidad de intereses, la conciencia de ella y el grado de concierto en la acción que normalmente los medios dirigentes muestran. Igualmente admisible es la existencia, ya aludida, de la función arbitral del Estado entre los intereses de los grupos económicamente dominantes y los de las mayorías más movilizadas. Y admisible, por último, que en sociedades abiertas y complejas existan lo que se ha dado en designar "élites funcionales". Pero éstas reclaman párrafo aparte.

LAS "ELITES FUNCIONALES"

En sociedades abiertas y complejas, se dice, cada sector de actividad esencial, sea éste el empresario, el político, el educativo, el militar, el sindical, etc., promueve al tope de cada uno de ellos una selección de dirigentes reclutada entre los más capaces (las versiones y calificaciones de tal capacidad varían). Pese al alto "status" que alcancen, la naturaleza de su posición y la de la sociedad en que la asumen comporta tanto una constante reno-

vación de titulares como, pese a los lazos que entre cada tope puedan anudarse, la relativa independencia de cada sector. Las élites que interactúan no son de signo homogéneo: las hay "residuales", "dominantes" y "emergentes", "formales" e "informales", etc.

Como en otros puntos de nuestro tema, sobre el presente inciden a la vez la verificación empírica y el "velo ideológico", la realidad y el deseo. Las "élites funcionales" o "categorías dirigentes" (como las llama Aron) ¿sustituyen idóneamente la necesidad y la legitimidad de una clase, de un sector dirigente "real", director y unificador de todos los ramos de actividad? ¿O, por el contrario, pueden —variablemente— integrarse en él, permanecer a su margen o actuar de fuerzas de réplica a su dominio? Tal es, al menos, nuestro parecer.

Gaetano Mosca (1858-1941): la "clase gobernante" o "política" como realidad subyacente a todos los regímenes.





Vilfredo Pareto (1848-1923): el sube-baja de las "élites".

TIPOS NACIONALES CONCRETOS

Si la formulación teórica es así de complicada y se abre sin cesar hacia dilemas mayores, ello explica en buena parte que haya sido con análisis empíricos de estructuras minoritarias determinadas que se creyó tocar tierra, que se pensó superar el nivel de las ideologías y de una estéril escolástica. El modelo tradicional de la "oligarquía" tradicional latinoamericana y su descomposición hacia moldes elitistas más nuevos han suscitado ya exá-

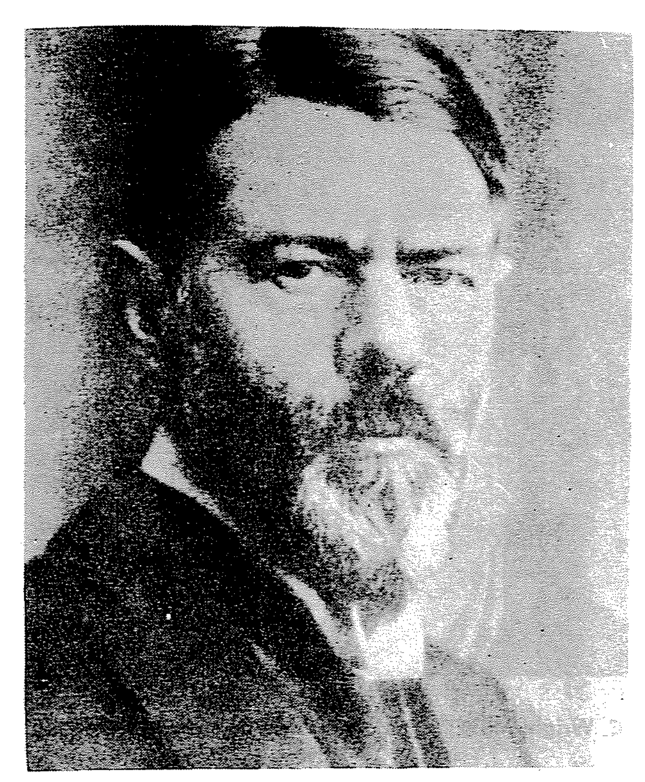
menes variados, entre los que vale destacar la desigual compilación sobre sus "élites funcionales" dirigida por Lipset y Solari (Buenos Aires, 1967); el evasivo planteo argentino de José Luis de Imaz ("Los que mandan", 1965) o el análisis global de François Bourricaud sobre "Poder y sociedad en el Perú contemporáneo" (Buenos Aires, 1967).

Al nivel de las configuraciones nacionales más plenamente desarrolladas y estables han sido, fuera de duda, Gran Bretaña y los Estados Unidos la materia más explorada. Hay una perspicaz literatura sobre esa red de entrelazamientos familiares y formativos —en los que los tradicionales "public schools" siguen siendo fuerza de primera línea—, sobre ese sistema de facilitación de las carreras, sobre ese repertorio de maneras y posturas ideológicas al cual la compilación dirigida por Hugh Thomas puso, al filo de 1960, el nombre exitoso de "Establishment" inglés.

En 1956, con su "Élite del poder", C. Wright Mills ofreció una imagen de la concentración del mando en la sociedad norteamericana que, pese a sus graves defectos de objeto y método, suscitó un eco universal. Desechando el modelo posible de una "clase dominante" de ricos gobernando el país, Mills propuso el de una sociedad conducida por un firme entrelazamiento de líderes de los tres sectores decisivos que constituyen el "business", las fuerzas armadas y el alto escalafón político (descartó a los legisladores y la misma Presidencia). Mostrándolos atrincherados en esas verdaderas "ciudadelas corporativas" que representan los super-monopolios, el Pentágono y las grandes secretarías del Ejecutivo, subrayó la creciente angostura del estrato social en que ese liderazgo político, empresarial o militar se recluta, verificó las corrientes de pasaje masivo de unos sectores a otros (empresarial al político, militar al empresarial). Buscando "delimitar el área" dentro de la cual son adoptadas las grandes decisiones nacionales, afirmó su práctica identificación con el ámbito de intercambios personales de esa élite. Sobre un análisis del fenómeno de la "sociedad de masas", mostró la imagen de una comunidad nacional modelada en forma cada vez más homogénea y total por enormes fuerzas impersonales cuya propiedad y dirección pertenece a aquel entrelazamiento de grupos y cuyos intereses naturalmente sirve, legitimándolos ante la inmensa mayoría pasiva.

LOS FACTORES COLIGANTES

Delinear un sector realmente dirigente, aun cuando no aparezca recortado con perfil ostensible, conduce a la pretensión de mostrar "cómo" se llega a él, qué fuerzas lo instauran. En cuanto se trata de un grupo social "real" adquieren en este orden relevancia: —(1)— la comunidad de origen social y aun, en ciertas situaciones, las de origen racial, nacional y geográfico. Pero en todos los casos modernos dignos de tener en cuenta ningún tope social organizado puede bastarse con miembros de idéntica o similar proveniencia, lo que explica la relevancia fundamental de —(2)— los factores supervinientes de socialización e identificación. La formación educativa posee en casi todas las sociedades alta importancia pero también la tienen los contactos personales, los entrelazamientos matrimoniales, la semejanza del estilo de vida, la imposición de unas mismas perspectivas y una postura ideológica común. Del juego de estas dos variables deriva otra —(3)— que es la del grado de permanencia, del índice de estabilidad del grupo directivo. Éste suele incrementarse a través de la presencia continua de unos mismos linajes familiares o de determinados modos de reclutamiento. En situaciones de concentración de poder es común que en éstos una cooptación más o me-



Max Weber (1864-1920): el poder político-social y la dialéctica entre "burocracia" y "carisma".

nos arbitraria o el parentesco jueguen un papel más considerable que cualquiera de los criterios impersonales de eficiencia habituales en una "meritocracia" abierta.

Las tres fuerzas precedentes no nos darían (es seguro) una función dirigente, activa. Para cerrar el círculo es necesario agregar: —(4)— la muy presumible existencia de "intereses" comunes frente a los demás sectores sociales; —(5)— la conciencia, no siempre igualmente viva, igualmente lúcida, de esa identidad de intereses; —(6)— la organización de una "acción concertada". El concierto de una acción común es, con mucho, el punto más interesante en cuestión, puesto que ella puede expedirse ya a través del "espíritu de cuerpo" y la continuidad de esas grandes "ciudadelas corporativas" de que se hablaba, ya por la "multifuncionalidad" o "multiplicidad de roles" ejercidos por ese lote dirigente que se desplaza de una actividad social a otra (y, en especial, de los negocios a la política), ya por el intercambio continuo de los papeles desempeñados en aquéllas.

Esta red de relaciones interpersonales, valores y comportamientos e intereses comunes capaz de coordinar la gestión de los siempre existentes sectores sociales importa, unívocamente, una concentración de "poder". Y es —como ya se decía— en el ejercicio de plantear, orientar, controlar, vetar, llegar a las grandes decisiones, que ese "poder" se emplea y se acrece. Punto de prueba difícil pero punto también inexcusable, importa la piedra de toque de la existencia de una cumbre política, económica y social unificada, no ostensible sino más bien discreta y capaz de tener firmes las riendas de la colectividad, detrás de los titulares públicos del sistema estatal o de los personeros de las instituciones privadas.

UNA ESTIPULACION PROVISORIA

Parece razonable despejar ciertos equívocos de vocabulario que hasta aquí no nos han preocupado, y fijar en adelante el sentido de ciertos términos.

Hablaremos de "clase dominante" en el sentido clásico de la expresión, aun advirtiendo que para nosotros el concepto, sociológicamente equívoco, de "dominio" indica menos "poder incontrastable" que un poder "menos contrastado", más

difícilmente contrastable que el de las otras clases sociales.

Entendiendo que el "sector dirigente" unificado de la sociedad no es, en el caso de existir, una "clase" plenamente tal, así lo designaremos.

Por las mismas razones, nos negaremos a la tan común facilidad de hablar de "clase política"; "elenco" o "personal" o "sector dirigente político" son por el contrario calificativos aceptables y capaces de marcar no sólo su singularidad sino, incluso, su relativa independencia respecto a otros grupos sociales.

Pero como, además de ello, la colectividad subsiste mediante el cumplimiento de una serie de funciones y ese cumplimiento importa, en cada sector, un grupo dirigente más o menos funcional y "meritocráticamente" reclutado, llamaremos a éstos "élites funcionales" o "categorías dirigentes", integradas o dependientes unas del sector dirigente global (cuando existe), al margen otras, y extrañas totalmente al área de aquél, unas terceras. A estas últimas, por su postura controversial frente al poder efectivo, por su proyecto de promover el cambio cualitativo hacia un nuevo tipo de sociedad, les cabe la designación de "contra élites" y constituyen el núcleo dinámico de la factible "contrasociedad" que dentro de la antigua se inviscera.

Como apuntaremos por qué razones no cabe, ni cupo hablar nunca en el país de "oligarquía", por lo menos en sentido estricto, sólo resta un agregado sobre el uso del concepto "élite del poder". Consideramos fundadas las críticas dirigidas a Mills de que (en otras manos que en las suyas) tiende a encubrir, a velar ideológicamente, la realidad de la estructura de "clase" sobre la que descansa la constelación del poder en las sociedades capitalistas. Es de creer, en cambio, que procede su aplicación a las colectividades de economía socializada, en las que la función de dirección política, económica y cultural es independiente de la propiedad (aunque no siempre de algunos de los gajes que ésta conlleva) y, sobre todo, no trasmisible hereditariamente. Se trata de la estructura social cuya originalidad trató de acuñar el yugoslavo Milovan Djilas con su planteo más exagerado y (en ocasiones) caricatural que enteramente descaminado, de una "nueva clase" en el tope. La expresión millsiana nos resulta mucho más adecuada para definirla y sobre todo más neutra y prudente. Como es obvio, su empleo no cabe en el Uruguay, por lo menos hasta el momento en que redactamos estas páginas.



C. Wright Mills: la radiografía de un sistema de poder.

EL PASADO

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA EN AMERICA

Es posible que nuestra historiografía no haya subrayado de modo suficiente la originalidad extrema de nuestra estructura social fundadora. Que las metrópoli trasplantaran su estratificación de clases a sus respectivas colonias constituyó un fenómeno regular de la expansión europea. Que se posesionaran de zonas geográficas relativamente vacías —esto es, con una población indígena escasa y difícilmente sojuzgable— lo fue mucho menos. Sólo Australia y Nueva Zelandia, las comarcas templadas y frías de América del Norte y la cuenca del Plata entran con holgura en este rubro.

Pero la acción de poblamiento anglosajona tuvo precisamente en esas regiones sus más peculiares características, puesto que no son fenómenos muy generalizables el de las sectas religiosas disidentes que se asentaron en la costa occidental norteamericana ni las colonias de presidiarios en que se nucleó el esfuerzo colonizador en las grandes islas de Oceanía. Por encima de estas diferencias, la europeización llevaba impresa la marca enérgica de la "modernidad" capitalista y de la racionalidad burguesa, el sello, en suma, de procesos sociales que mostrarían, por un extenso período, su ingente poder creador.

Singular se hace, en contraste con este cuadro, la implicancia social del asentamiento hispánico en el Río de la Plata. Una comunidad que vivía su etapa cristiano-misional y señorial se extrapoló aquí sobre una comarca de población nativa a la vez rala e insumisa. Pero pesó tanto como las condiciones demográficas el que las naturales la predestinaran, desde un principio, a una actividad económica, la ganadera, cuyas exigencias de trabajo humano eran más bajas que las de cualquier

otra concebible. (Y sobre todo más que las de la minería y la agricultura de plantación, dominantes en casi todo el resto de Latinoamérica.)

En tales condiciones sería ingenuo suponer que esa "extrapolación" social de que se hablaba se cumplió de modo global. Esto es: trasladando al continente nuevo todos los niveles de la estratificación peninsular sin cambios apreciables en sus relaciones recíprocas. Psicológicamente y socialmente imposible hubiera sido que la tarea poblacional se cumpliera en estas condiciones: ni para los de abajo ni para los de arriba hubiera ofrecido la nueva tierra el aliciente necesario para vencer los riesgos y las incógnitas de un traslado desapacible y peligroso.

UN MUNDO DE "HIDALGOS"

Hubo por ello que dotar a los primeros núcleos pobladores organizados (en la fundación de Montevideo se cumplió cabalmente tal exigencia) de un estatuto de privilegios y ventajas que los instauraban —por lo menos simbólica, "homeopáticamente"— en clase superior dominante.

Empezaron, ya se decía, de modo contradictorio, siendo dominadores con muy poco elemento inferior al cual dominar. La posesión de la tierra, que por lo menos en los comienzos se les aseguró con relativa equidad a estos "hidalgos" de nueva cepa, es en sí misma poco, sin gentes cuyo sudor la haga fructificar, obligación universal que las menores exigencias de mano de obra de la ganadería amortizan pero no cancelan.

Tal fue la paradójica situación. Una situación que, por su misma índole, no podía resultar duradera. Una situación sobre la que incidieron variables que desataron el dinamismo social uruguayo y configuraron esa "clase dominante" y ese "sector dirigente" que nos interesan.

Sobre el carácter relativa y aun absolutamente modesto de los grupos originarios españoles obra suficiente información biográfica y genealógica; el hecho de que, una vez accedidos a la riqueza, los más aventajados de ellos pudieran acreditar sus "cartas de hidalguía" y su limpio linaje de "cristianos viejos", poco altera la índole trabajosa de una "primera acumulación", en cuya rapidez debieron obrar tanto la actividad comercial como el ejercicio de las capacidades posesivas en el área temible del campo abierto y, tanto una y otro, como la habilidad para manejarse en los complicados canales de prebendas de la administración colonial. Todo lo anterior concurrió probablemente a marcar por el éxito carreras como la de Bruno Muñoz, uno entre muchos, llegado al país como polizonte y, hacia el final de su vida, propietario de casi inabarcables dominios territoriales.

Por otra parte —y es un nuevo factor de diferenciación— esa relativa mediocridad de la condición social de los fundadores admitía las excepciones muy considerables de la alta burocracia civil y militar española y los grandes empresarios coloniales. Los Alzáibar, los Viana, los Oribe, los García de Zúñiga, cuatro apellidos conspicuos, representan en distintos momentos un estrato social al que sus funciones oficiales o sus vinculaciones con ellas permitieron una sustancial mejora de posiciones en la lucha de todos contra todos por los instrumentos del poder económico que se dibujaba en la sociedad naciente.

Toda la historia posterior de los movimientos de la clase alta en el núcleo social asentado en la Banda Oriental resultará de la interacción entre estas ventajas iniciales y el indescartable coeficiente del dinamismo personal y familiar (se ha destacado ocasionalmente el ejemplo notorio de Miguel Ignacio de la Cuadra; ya lo hicimos con el

de Bruno Muñoz) que llevarán al tope a algunos y arrastrarán a otras personas y a otros linajes a un paulatino y a veces rápido descenso social. Pero como esta sociedad oriental no crecería bajo una campana neumática, tal interacción no sería comprensiva si se descartara el adensamiento demográfico que provocaron tanto la inmigración (ya española, ya originaria de otras zonas del Plata, relativamente pausada) como las cruzas raciales —de portugo-brasileños, indios, españoles marginados y negros— que resultaron en el tipo del "criollo", ubicado en diferentes niveles sociales, y en el del "gauderio" y "gaucho", mucho más definidamente situado en el del "pobrerío".

De esta concurrencia de las tres corrientes: la de descenso social, la de inmigración y la de cruzas, salieron la débil clase media urbana comerciante y artesanal y una masa paisana bastante diferenciada internamente desde una capa pequeño-propietaria hasta la móvil plebe en que se reclutó el peonaje. Se ha mencibnado a los negros como ingredientes del juego de cruzas. Mayor entidad hay que asignarle al hecho de que la masa de gente de color, producto del tráfico esclavista que tuvo en Montevideo uno de sus grandes centros americanos, perfila una estructura social que, durante el coloniaje y por lo menos tres décadas del período independiente, no difirió drásticamente de otras latinoamericanas (la del Brasil, las de las Antillas). Marcada la semejanza, queda abierta a la discusión hasta dónde ella puede llegar, pues ni la entidad numérica de la población esclava se acercó a la de los ejemplos mencionados, ni esa cuantía determinó un trato (duro, cauteloso) igual ni, especialmente —esto es lo más polemizable—, condicionó con tanta fuerza los comportamientos y la latitud de acción del sector trabajador formalmente libre.

RESTAS A UNA "OLIGARQUIA"

Cortemos estas consideraciones. El período colonial oriental presentó, sobre una sociedad muy móvil e indecisamente estratificada, una clase superior dominante cuyo poder estaba asentado sobre la propiedad de la tierra, la titularidad de los altos cargos públicos y el ejercicio de la actividad comercial e industrial (comercio importador y exportador, saladeros, navegación, esclavatura y préstamo dinerario). Los primeros profesionales liberales (abogados, médicos) se suman a estos sectores a los que entrelazaban estrechamente, tanto la pequeñez de la sociedad superior montevideana y el sistema de parentescos como la afinidad o continuidad natural de varias de las mencionadas actividades. También en estos casos la "multifuncionalidad" de casi todas las figuras notorias era más bien la regla que la excepción y aun continuó siéndolo —y no sólo en el sector económico— durante todo el siglo XIX.

Supongamos afirmada al principio de esa centuria tal estructura de poder económico-social. E imaginemos que sin la intervención de nuevas variables y apoyada en la clásica, triple conjunción de la fuerza armada, la Iglesia y el "sistema de hacienda", en el Uruguay se hubiese reiterado el modelo común latinoamericano de esas "oligarquías" nacionales relativamente intocadas hasta el doble embate (no hace más de tres cuartos de siglo) del ascenso de la clase media y la industrialización. Fijado idealmente tal punto de partida, cabe pensar que los trazos enérgicos de originalidad que signaron el desarrollo del país no derivan "sólo" (pues es una suposición modesta) de lo sucedido en el primer tercio del XX. Por el contrario, y en tal perspectiva, serían las variantes que sobre el esquema mordieron durante la centuria anterior las que permiten ir a las fuentes de esa

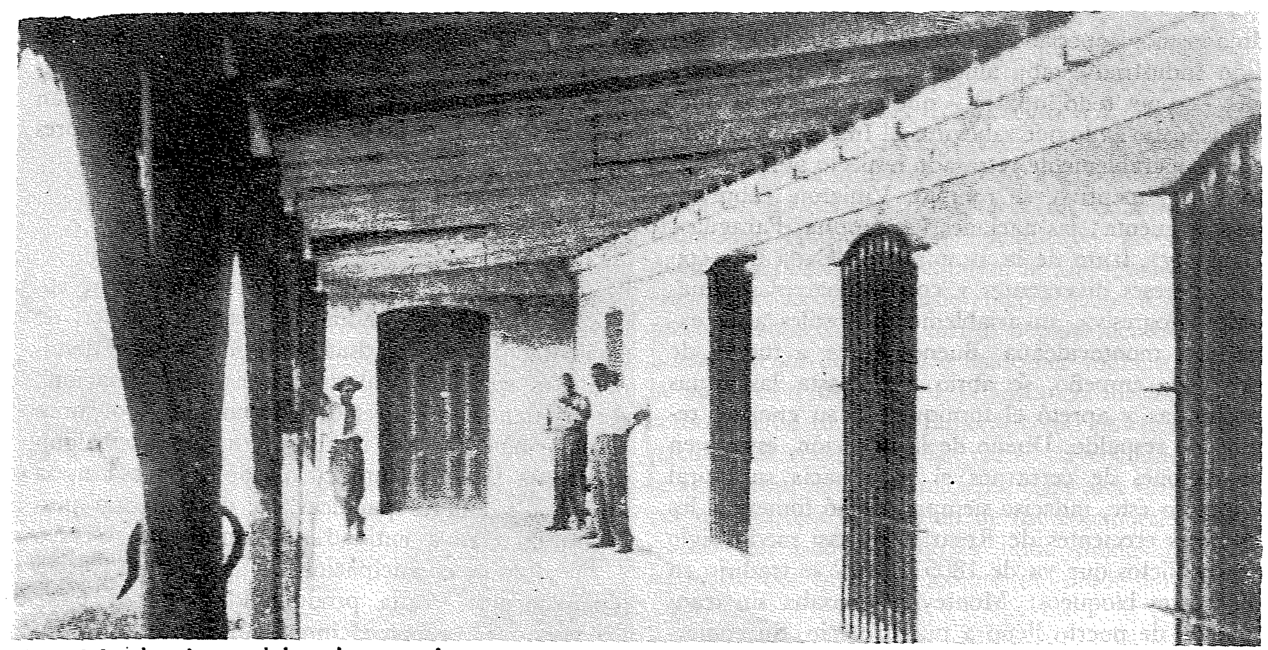
originalidad e, incluso, a la índole excepcional de las tres décadas que le sucederían. Tentativamente, enumerémoslas.

Un país, para comenzar, por su situación geográfica y el tardío asentamiento de su estructura administrativa y cultural, ideológica y demográficamente abierto. Lo que quiere decir también, y más en concreto, menos monolíticamente hispano-criollo y menos ortodoxamente católico que cualquier otro de Hispanoamérica. El Río de la Plata y su virreinato fueron hijos de la España borbónica e "ilustrada", una filiación que los aleja mucho más que al resto del "reino de Indias" de las pautas de conducta y los valores de la Contrarreforma. Y esta excepcionalidad se acentúa grandemente en las tierras en que se desplegaría el Uruguay si se la compara con las huellas culturales ya impresas en lo que sería la Argentina. El cotejo es revelador no sólo con la zona centro-norte, firmemente tradicional (aun hasta hoy), sino incluso con Santa Fe y con Buenos Aires, mucho más próximas, por múltiples factores, a los trazos que nos caracterizaron.

La ruptura revolucionaria que cubrió veinte tormentosos años y que importó en tantos países latinoamericanos la mera sustitución de la clase administrativa española por unas oligarquías sociales hispano-criollas frecuentemente peores, asumió en el Río de la Plata aspectos de complejidad que no siempre poseyó en otras áreas. Lucha de fidelidades "nacionales", confrontación de definiciones ideológicas, pugna de intereses concretos de clase y de subclase, choque de reflejos estamentales, divergencia de prospectos y estrategias políticas que cambiaban al tenor de las tensiones mundiales, quiebra de generaciones aparentemente gratuita dentro de los mismos linajes, fidelidades que se anudan entre los caudillos y sus séquitos y violentos enconos regionales hirvieron en el caldero bullente de esos "tiempos revueltos". Hirvieron más de lo previsible y sin que entre las polaridades que se marcaban por lo común en cada uno de esos niveles se dieran afinidades suficientemente firmes para ofrecer por mucho tiempo un compuesto mínimamente estable e inteligible.

Mayor fue la violencia material del período independentista en otras zonas —caso de Venezuela— que en la del Plata, pero tal vez en ninguna lo ocurrido durante él y en las largas décadas de anarquía que le siguieron tuvo un impacto tan tremendo como el que poseyó en el Uruguay sobre la consolidación de una clase dominante o un sector dirigente.

El impacto mencionado se ejerció en varias direcciones y es menester verlo en todas ellas. Su aspecto más importante fueron probablemente los reiterados períodos en que el campo uruguayo y su estructura estanciera quedaron expuestos a los efectos del pasaje y estacionamiento de los ejércitos con su regular secuela de devastación. Agréguese a tal situación la "índole civil" que a estos conflictos dirimidos (y a veces sólo prolongados) por las armas, les prestaba el entrecruzamiento de los intereses, la identidad de los perfiles ideológicos, las afinidades humanas y sociales que yacían bajo los bandos beligerantes. Por obra de estos factores tal carácter persiste, entonces, aun en los períodos en que la estructura estanciera quedó librada al embate de guerras formalmente internacionales, tal como ocurrió en los dos decenios que corrieron entre 1808 y 1828, en los dos transcurridos entre 1832 y 1852 y entre 1863 y 1870. Y como quien dice "guerra civil" menta también destrucción superflua y lesión deliberada al patrimonio de los enemigos, tal consecuencia tuvo probablemente más peso que todas las medidas punitivas regulares y que todas las confiscaciones exteriormente legales (que también



Los viejos bastiones del poder agrario.

las hubo, y no solamente en la redistribución agraria artiguista y en las confiscaciones del gobierno del Cerrito). Como es obvio, ni rozar se puede aquí una precisión sobre la movilidad de los titulares de la propiedad de la tierra del país durante el siglo pasado. Pero una comparación con los grandes latifundistas de la provincia de Buenos Aires durante ese lapso es extraordinariamente reveladora de hasta qué punto este y otros factores renovaron de nuestro lado del río un elenco de grandes estancieros que muestra en cambio, en la otra orilla, firmísima persistencia familiar. Hoy puede decirse que casi sin excepciones (sólo los títulos de López de Haro y Uriarte, que sepamos) nada han retenido los descendientes directos o indirectos de aquel orgulloso y potente "Gremio de Hacendados" de los primeros años del siglo XIX.

Pero si la tierra era uno de los pilares de un esbozado sector dirigente, el tráfico comercial era el otro. A cierta altura del desenvolvimiento montevideano, sus ricos empresarios lo vieron dotado de tales horizontes, de tan piafante vitalidad que no dudaron en hablar de él como de un "destino manifiesto". Y en verdad que la condición de la ciudad (puerto de aguas profundas frente a un Buenos Aires anegado por el barro, patronato mercader despierto, ambicioso y desaprensivo, con un vastísimo "hinterland" —toda la cuenca platense y sur brasileño— de capacidad productiva y consumidora apenas tocada, ágiles flotillas que llegaron a surcar todos los océanos) parecía pronosticarlo. Pronóstico errado. Puesto que sólo era posible en el ámbito de un imperio hispánico subsistente, apto para enfrentar el desafío de los nuevos

dinamismos imperialistas mercantiles que la Revolución Industrial estaba alumbrando. Es por todo lo alto —o por todo lo bajo— que el proyecto se quebró y acabó en lo que sabemos. El Imperio, asediado e irrecuperablemente retrasado respecto al ritmo histórico competitivo, se rompió. Vinieron (abreviamos la cuenta) las naciones (Argentina, Paraguay, Uruguay), fruto de la atomización. Cada una con sus intereses divergentes y con sus barreras aduanales progresiva, invariablemente hostiles a la expansión montevideana. Buenos Aires, a fuerza de oro y de empeño, se abrió paso hasta las aguas profundas y apretó el torniquete a su enorme región de respaldo. Dueño de la situación, estuvo en condiciones de cerrarnos el paso hacia su litoral e incluso éste, indeciso siempre, debió fomentar los intereses crecientes de Rosario. El casi medio siglo de conflictos que va de 1805 a 1852 se tradujo en incesantes bloqueos: Montevideo pasaba sin transiciones de puerto lleno a puerto vacío. Su comercio debió someterse a los vaivenes de una política internacional cuyas decisiones mayores se tramitaban muy lejos y, en tal contexto, el especulador desplaza al empresario de largas vistas y pautados proyectos.

Lo que quedó de las iniciales perspectivas fue bastante para sustentar el poder de la clase comercial de una pequeña nación, de una "burguesía intermediaria" gestora de un "emporio" del comercio importador europeo, exportadora de carne salada, cuero y algunas lanas (más tarde). A sideral distancia, sin embargo, se situó todo respecto a los esplendorosos prospectos de 1800.

Las dos precisiones anteriores podrían cerrar este sintético recuento de los motivos que hicieron de la clase dominante oriental y de su sector dirigente una estructura de poder menos firme de lo que aparecieron primicialmente, lo que también equivale a decir, una sociedad más móvil, más abierta, menos "oligárquica" que casi todas las restantes hispanoamericanas. Sería, con todo, peligroso omitir dos series de fenómenos que podrían oficiar eficazmente de parámetros, de demarcadores complementarios.

CLASES Y ESPIRITU

A uno hemos aludido y a otro propósito; corresponde reiterarlo ahora. El grado de poder, de capacidad de "supraordinación" de una clase dominante es correlativo al grado de "subordinación" y a la cuantía de los sectores dominados. Volvamos a mencionar lo ya sabido y a agregar algún matiz: la falta de integración de la escasa masa indígena a labores pacíficas, su desaparición posterior, la relativa entidad del contingente esclavo y su ulterior emancipación, la movilidad, arisca independencia y alta productividad "per capita" del paisanaje peonal, el intenso dinamismo económico del aporte inmigratorio posterior y aun las actitudes ideológicas poco propicias a la docilidad de buena parte de él (caso del italiano). Tras esta enumeración dejemos algún cabo suelto (para volver a retomarlo más adelante) y postulemos como conclusión que todos estos niveles, globalmente dominables, fueron dominados y dirigidos, sí, hasta un cierto grado. Pero no al grado en que lo fueron los que poblaban Chile, Perú, Colombia, México, Cuba o Brasil, para aludir a los casos más claros.

La otra serie de fenómenos apunta a esas realidades mucho más elusivas e inmateriales (aunque sean registrables) que son "comportamientos" y "espíritu". La España conquistadora y colonizadora movió su acción al estímulo de valores y metas en las que se entremezclaron lo "precapitalista" y lo burgués, lo señorial y lo mercantil; corrieron juntos el gesto cristiano de desprecio por



Juan María Pérez (1790-1845): la nueva fortuna post-revolucionaria.

los bienes terrenales, la avarienta actitud acumulativa y el despreocupado dispendio nobiliario que supone inagotables las fuentes económicas del privilegio. Hacia el fin del período hispánico el abanico puede cerrarse algo: subsistieron, sin embargo, los dos últimos términos de la terna y esto (es obvio para uno), durante largo tiempo. En los caudillos mayores (hay una excepción: Lavalleja), en muchos viejos estancieros, etc., sobrevivieron las conductas imprevisoras, los reflejos precapitalistas y señoriales.

El espíritu burgués, robustecido por la obra de la "Ilustración" española, fue sin duda el dominante en las clases altas: el sector comerciante montevideano, los ávidos usureros y arrendatarios de impuestos del período independiente, los nuevos núcleos inglés, francés, catalán, la inmigración vascuense de clase media que entró a saco en la propiedad estanciera de varios departamentos, dan buena cuenta de ello. De cualquier manera, cabe la suposición de que en la instancia decisiva de consolidación de su dominio y como potencial capacidad de respuesta a las varias adversidades que la acuciaron, faltó a la naciente clase alta uruguaya esa unidad, esa univocidad de motivaciones y conductas que pudo ser factor nada desdeñable en su lucha por niveles máximos de predominio.

EL PATRICIADO INDEPENDIENTE

Durante casi tres cuartos de siglo puede marcarse la persistencia de una estructura de poder político, económico y social cuya responsabilidad asumió la constelación humana que es habitual designar como "patriciado". Se trataba de un grupo social bastante reducido y estrechamente unificado. Concurrían a hacerlo las impactantes experiencias comunes, los modeladores ideológicos que a todos alcanzaban, los inextricables entrelazamientos parentales que en cualquier congregación endogrupal el tiempo tiende a producir. Sector dirigente o élite real de "poder", en el sentido de que su autoridad social tenía su asiento en la propiedad o control de los bienes económicos, en la ocupación de los primeros "roles" de decisión estatal, en el prestigio cultural, fue también un sector dirigente o "élite funcional". En efecto, este elenco muy corto de personalidades tuvo que

asumir todas las funciones —sumarias, pero inevitablemente diversas— que implementaban una colectividad diferenciada, nominalmente soberana, una sociedad con un Estado al tope. La "multifuncionalidad" fue entonces, al conjuro de esta novedad y de esta cortedad numérica, imposición del medio social sobre todo individuo de clase elevada medianamente apto. No es raro, por esto, que en tantas biografías del siglo pasado se registren, simultánea o sucesivamente, actividades ganaderas y comerciales; militancias partidarias regulares y revolucionarias; responsabilidades ministeriales y misiones diplomáticas; acción política en el periodismo o en las legislaturas; empeños intelectuales en el libro, en la cátedra, en los certámenes, en las fugaces revistas...

En buena parte descendiente de la clase dominante colonial, unificado de nuevo tras veinte años de escisiones por una especie de operación de "borrón y cuenta nueva" en que se cancelaron recíprocamente culpas, méritos y filiaciones, en la que "godos" y "tupamaros", "patriotas" y "cisplatinos" emergieron (hubo alguna excepción) limpios de polvo y paja, el patriciado reasentó su poder. Lo hizo tanto sobre los menguados restos de los patrimonios ganaderos y comerciales como sobre la nueva riqueza (que no siempre partió de cero) que en los "tiempos revueltos" algunos duchos en los vericuetos de "la carrera de la revolución" fueron capaces de agenciarse o incrementar sustancialmente. Este tipo de hombres con *l'occhio aguzzo per baratare*, como aquellos campesinos que bajaban a Florencia en el alba del capitalismo y que evocó Dante en su "Commedia" (Par., XVI, 57), tuvo en Juan María Pérez su dechado más completo.

A las dos capas mencionadas deben agregarse todavía los muchos económicamente pobres pero de origen "decente", integrados con los más potentes a través de la formación educacional y de experiencias comunes. Se trata de un proceso de identificación que en una sociedad tradicional y reducida prima a las capacidades más notorias y aun a los meros brillantes. Es también un fenómeno regular de adscripción a sí mismos que practican todos los núcleos dominantes por cerrados que parezcan y que se completa, por lo ordinario, a través del emparentamiento.

PATRICIADO Y POLITICA: PROBLEMAS Y POSIBILIDADES

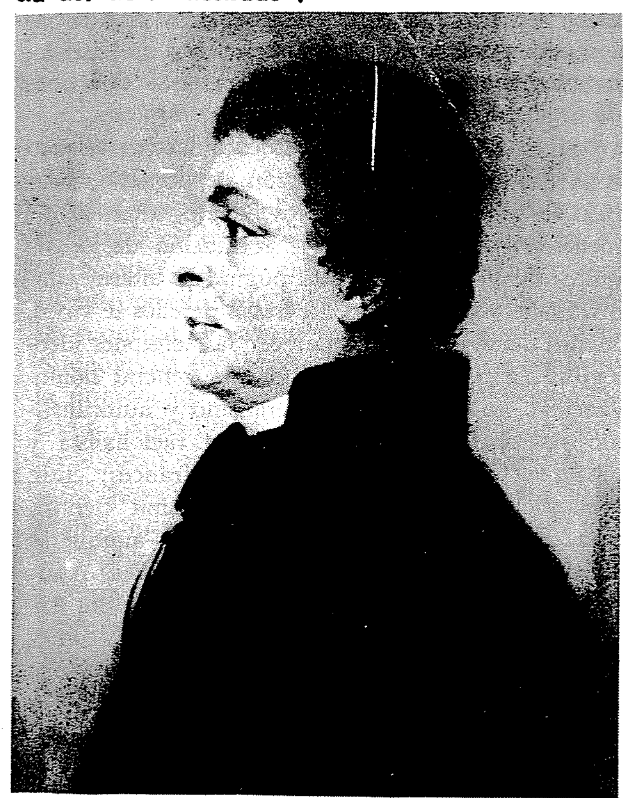
Pero el patriciado fundó también su poder en el peso considerable que fue capaz de ejercer a nivel de las grandes decisiones gubernativas y en el práctico monopolio de los cargos y provechos que importa la creación de un Estado nuevo, por destartalado y precario que sea.

Suele verse en la Constitución de 1830 el previsor documento con el que el sector dirigente letrado trató de asegurarse tal primacía frente a las clases inferiores, cuya participación política retaceó de acuerdo con las concepciones censitarias de la época y también frente a los militares, es decir: frente a los que habían llevado el peso de la acción física por la independencia, en los que el patriciado vio una fuerza disruptiva potencial, tanto por sus eventuales pretensiones corporativas como por su capacidad de establecer alianzas con las capas más desfavorecidas de la población.

Esas pretensiones se formalizaron y esas alianzas se contrajeron. En el vacío institucional y poblacional del país, en su exposición a las incursiones de las naciones vecinas y al incesante entrelazamiento con sus conflictos (en una continuidad que las mal dibujadas fronteras no habían cancelado), la clase dirigente patricia vivió casi medio siglo con el corazón en la boca. Cierto es que no plan-

tearon problemas la clase media incipiente ni un proletariado urbano que no existía. La amenaza social que representa una presión desde abajo coherente y continuada, capaz de unificar por ella la clase superior en formación defensiva, tampoco sopló fuera de los arrabales de la "ciudad-puerto". Esa amenaza, que existió, fue en cambio anómica, esporádica, inarticulada como es común que sea en tales condiciones. Pero si directamente fue ése su modo de actuación, indirectamente la presión social se expresó a través de los séquitos de los caudillos (Rivera, Lavalleja, Oribe, Flores, etc.). Aunque a través de esos séquitos, que constituían carta fundamental de la lucha por la imposición personal, nada similar a la frustrada revolución agraria artiguista fue capaz de procesarse, de cualquier manera su heterogeneidad, la diversidad de niveles sociales que englobaban impuso por su propia existencia formas de retribución capaces de nutrir una corriente continuada de apoyo. Ello llevó a que el caudillo actuara regularmente como instrumento de ciertas modalidades de compromiso social que indudablemente retacearon el poder de esa clase dirigente civil que en 1830 pensó asegurarse el país para sí.

Dámaso Antonio Larrañaga (1771-1848): la influencia del clero "ilustrado".



Caudillos hubo en los que la importancia de esta función fue mayor —caso de Rivera— y mayor todavía la forma anárquica de cumplirla. Caudillos hubo —como lo fue Oribe— que sin desmedro de su condición (en parte ocasional) de tales, desplegaron un sentido del vigor de las formas y la regularidad de los procedimientos que llegó a convertirlos, como a aquél entre 1835 y 1838, en auténticos conductores del sector patricio más responsable y esclarecido.

Esa misma clase dirigente tuvo que formar en los séquitos de los caudillos (era mejor tenerlos cerca que sufrirlos de lejos) y de ahí viene su división irremediable. De ahí vienen también los bandos políticos tradicionales con su carácter poco confiable, y, si se recuerdan los ingredientes antes mencionados, su índole pluriclasista y sus variados aglutinantes, desde la atracción "carismática" hasta el móvil prebendario y el impulso de mera apropiación.

La "clase" o "personal político", en suma, adquirió por estas vías una autonomía —relativa, como lo son a la postre todas— que no siempre le hizo servir dócilmente los intereses del sector más alto. La popularización de los partidos, no tan



Oribe (1792-1857): caudillo del patriciado y defensor de la nacionalidad.

universal como suele afirmarse, pero alimentada sin duda por los fuertes rencores que la feroz lucha política suscitó, abrió el abanico de provechos hacia los sectores medios de letrados y militares. Estos últimos —deslindado el "caudillo", que era al mismo tiempo civil y militar—actuaron más bien como "grupo de presión" (casos de los períodos 1851-53, 1860-63, 1872-76) que como fuerza autónoma y protagonista. La excepción ostensible a esta regla se dio hacia 1875, en una situación en la que se conjugaron el llamado "vacío de poder" y el estado de espíritu que Marx analizó sutilmente en "El XVIII Brumario de Luis Bonaparte", en que una clase superior cree conveniente descargarse de los riesgos del poder político directo.

Todo lo precedente no significa —entiéndase bien— que el sector dirigente y dominante tradicional no conservara su poder político-social, de tipo "estructural" si cabe el término, capaz de enjugar las temporarias pérdidas de autoridad e influencia. Debe marcarse, sí, que en el aspecto político de ese poder debió actuar prácticamente sin Estado, en el sentido cabal del término, hasta casi fines de siglo.

Si la falta de un instrumento idóneo es una resta drástica a toda pretensión de dominio, también lo son las divisiones, los clivajes internos. Se mencionó ya el que creó la formación de los séquitos de los caudillos y la pugna de intereses individuales y de grupo que a través de ellos se virtió. Menos decisivas pueden parecer las tensiones ideológicas (aun entendidas sobre una general homogeneidad cultural) entre liberalismo y autoritarismo nacionalista, entre Ilustración racionalista y española y romanticismo de cuño francés; entre romanticismo espiritualista y positivismo cientificista. Enorme trascendencia tuvieron —aunque se marquen menos— las divisiones simultáneas o sucesivas que provocó la participación entre los variados proyectos (porteñismo, brasileñismo, confederacionismo —cuando la división de Buenos Aires y el resto de la Argentina entre 1852 y 1862— o autonomismo orientalista) por medio de los cuales la clase dirigente creyó salvarse y asentar el país sobre bases firmes.

PODER POLITICO, PODER ECONOMICO Y EXTRANJERIZACION

Incierto, convulso el trámite político, se produjo mientras tanto un creciente desfasamiento entre las constelaciones de poder que en él se reflejaban y los titulares del poder económico. Desde fines de la cuarta década —y aun hay antecedentes tan notorios como la familia Jackson— la extranjerización económica del país, el pase de la tierra y la gestión comercial a manos de extranjeros continuó sin cortapisas. Ingleses y franceses, vascos y alemanes, catalanes e italianos, fueron titulares y beneficiarios del proceso. Un proceso que alentaron la mentalidad precapitalista de parte de la vieja clase alta, la boga casi irrestricta de la ideología económica liberal, la primacía de las burguesías europeas que protagonizaban el auge del capitalismo comercial y los altibajos de un sistema económico precario y golpeado periódicamente por las brutales crisis mundiales y las depredaciones de la guerra civil. En el último rubro, décadas de lucha que a nadie ahorraban hicieron verdad el estatuto privilegiado del extranjero que tenía derecho a quedar al margen de ellas, que podía convocar el auxilio de sus legaciones, que podía presentar, a la primera oportunidad factible, las "cuentas del Gran Capitán". Como dijo Sarmiento algo más tarde, pero con vigencia para todo el siglo XIX: *¡Qué negocio el ser inglés!* (o por lo menos no ser rioplatense).

Bastante fluido fue el entrelazamiento de esos sectores ahora económicamente dominantes y los representantes tradicionales del poder social y cultural. Más rápido fue sin duda el de las colectividades de origen anglo-germánico, habitualmente partidas de un nivel más alto, a sus espaldas el prestigio de países identificados con los valores modernos. Más pausado resultó seguramente el mismo entrelazamiento cuando éste hubo de practicarse con los núcleos exitosos de raíz hispánica y especialmente de raíz italiana.

Hacia 1870 el Uruguay ya constituía una sociedad con una clase dominante regularmente estable y asentada en la cumbre de una estratificación perceptible aunque móvil. Fomentado o

Julio Herrera y Obes (1841-1912): la penumbra de la clase alta tradicional.



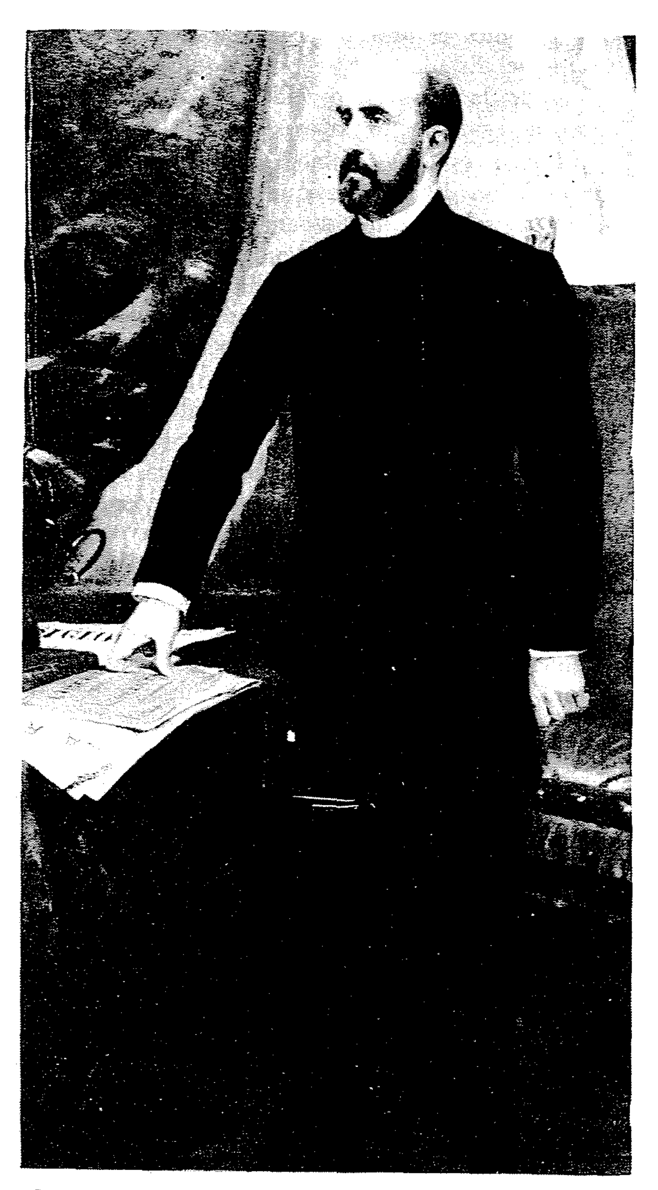
espontáneo, hay un consenso que admite la desigual distribución del poder político, económico y social. Tampoco desglosa la permanencia de esa formación superior, de los intereses globales del "adelanto" y el "progreso".

La estabilización y adensamiento de esa estructura de poder hacia la octava década es posiblemente lo susceptible de mejor verificación. Más discutible parece en cambio la existencia, en esa clase superior, de una "fracción hegemónica" firme y de un "monopolio del poder" por ella, como algunas veces se afirma respecto a la clase alta agropecuaria. Para que algo semejante hubiese sido posible, es de pensar que debieran haberse dado condiciones muy diferentes a las de inmadurez características de nuestro subdesarrollo. En cambio, y aun con cierta cautela, tal vez sea admisible hablar de sectores hegemónicos accidentales, del tipo que lo fueron el capitalismo usurario y especulador durante las dos presidencias de Rivera y toda la Guerra Grande (en Montevideo), los banqueros en el período que corre entre 1865 y 1875, los estancieros tras él, el "alto comercio" montevideano bajo los mandos de Tajes, Julio Herrera y Obes, Borda y Cuestas. Singular sí, fue, durante las últimas etapas mencionadas, la ineptitud del personal político en llenar los cauces más modestos de la "función exigida", ya que no fue capaz de servir los intereses de esa clase superior económica con la que estaba estrechamente unificada, ni llegó a sustentar metas específicas, ni alcanzó a abrirse seriamente (a otros modos aludiremos) a los restantes niveles sociales. Y si algo de esto puede imputarse a la corriente principista, otras responsabilidades apuntan en dirección distinta. Pero hay que reconocer sí que la acentuación, aun pasajera, de la corriente "principista" (arrestos juveniles de dogmatismo, doctrinarismo y romanticismo a candente temperatura) rompió su posible unidad en forma mucho más radical de lo que fueron capaces de hacerlo los ya muy desvaídos, insatisfactorios rótulos partidarios.

APOGEO DE LAS "CLASES CONSERVADORAS"

Hacia fines del siglo XIX el Uruguay aparece dominado y dirigido por una constelación también clásica basada en la propiedad agraria extensiva y en la gestión comercial, mientras al amparo de tal estabilidad se afirma, un poco detrás, el poder bancario (que medio siglo más tarde se erigiría sobre ellas) y un sostén doctoral, letrado, curado de sarampiones principistas —José Pedro Ramírez fue figura cimera del lote— da firmeza y proceral respetabilidad al conjunto.

El viejo patriciado o sus restos sobrevivientes no vio con buenos ojos este resultado (al que sin embargo ninguna otra alternativa propuso) y en nostálgicos sueltos y discursos necrológicos, en frases como las que abundan en el anecdotario de Herrera y Obes (deseos de "ver al alto comercio montevideano en alpargatas"; sentirse "capataz de una gran estancia cuyo directorio está en Londres") se expresó el desajuste. En verdad que se legitimaba. Por una parte, la formación de poder ya consolidada había asumido su "rol" de "burguesía intermediaria" dentro del proceso de inserción total del país al circuito económico del Imperio Británico. Por otra, sólo con Tajes, parcialmente, y con Cuestas, de modo pleno, esa burguesía encontró en la gestión del instrumento estatal las condiciones de seriedad, prudencia y eficacia que exigía. Lo que equivale a decir que durante los mandos de Varela, Santos, Herrera y Obes y Borda tuvo que tolerar no sólo el crónico retroceso de la guerra civil sino también la permanente inopia financiera del Estado (que a la postre ella, entre



Dr. José P. Ramírez (1838-1913): el texto legal santificador.

otras sufría) y el desprejuicio más extremo en el manejo del patrimonio público. El "orismo" fue la más contundente arma de réplica que encontró a la mano para oponer a tantos desvaríos que siempre tendían a traducirse en el empapelamiento monetario. Pero la puja tenía otras implicaciones, estaba lejos de ser puramente técnica. Pues el "papelismo" e, incluso, los hábitos dispendiosos y el tren deficitario de la máquina estatal que lo promovían eran en parte formas empíricas de abrir sobre ciertos sectores —empleados civiles, militares, pasivos, séquitos políticos de índole modesta— el abanico de ventajas que todo Estado se halla en posición de dispensar. Aunque no parezca dictada por ninguna voluntad filantrópica, puesto que más bien representaba arbitrios para lograr apoyos en la lucha por el poder entre hombres y camarillas, esa apertura coligó en su contra las "clases conservadoras" (Vanger observa que se autodesignaban orgullosamente así). Unas clases que, sin embargo, hacia 1900, pudieron considerarse razonablemente seguras.

HACIA EL COMPROMISO CON LAS BASES

No sabemos que se haya observado hasta qué grado de paradoja el primer mandatario elegido en 1903 satisfacía las pautas de seriedad, de responsabilidad que las "clases conservadoras" se sentían en condición de imponer. Porque, pese a ese "placet", Batlle habría de llevar hasta un nivel de hondura y coherencia desconocido los esbozos (más que nada inmediatistas) de un ensanchamiento de la participación económica, social y política registrados en el cuarto de siglo precedente.

Hombre del "cuestismo", aunque no de su camarilla, la elección de Batlle y Ordóñez no marcó inicialmente una discontinuidad abrupta con el inmediato pasado. Fue en los dos últimos años



Batlle (1856-1929): artífice del Uruguay del compromiso.

de su presidencia y sobre todo tras de su reelección que se reveló su capacidad innovadora. Al comienzo nada alteró sustancialmente la estructura establecida de poder, salvo que en su centro oficiaba una voluntad con metas distintas a las esperadas y un designio lúcido de fortalecer por los medios a su alcance (que eran muchos) aquellos elementos que creyó más idóneos para incentivar los cambios que se proponía.

No nació "ex nihilo" ese cúmulo de lo que se ha dado en llamar en forma básicamente justa, pero propicia a la exageración, el "Uruguay batllista". Venía del siglo XIX el desarrollo industrial modesto pero sustancioso que el país iría conociendo. No es una originalidad nacional el ascenso de las clases medias sino un proceso común a toda Latinoamérica y aun lo acrecientan a veces, como en nuestro caso, un régimen económico de explotación extensiva y su casi invariable correlato que es la macrocefalia urbana. No carecía tampoco de antecedentes el proceso de ampliación de los servicios del Estado, que la propia falencia y escándalos de la empresa privada había obligado, un poco a regañadientes, a asumir.

Cierto es, en cambio, que a través de esa acentuación de trazos a que se hacía mención, el Uruguay se convirtió típicamente en algo próximo al dechado de lo que algunas clasificaciones de los regímenes político-sociales llaman un "sistema de conciliación" o "compromiso". Concurrieron a modelarlo los altos índices de participación política que rápidamente se alcanzaron y que, a través de la estrecha pugna de los dos partidos, tornó muy conscientes a ambos de la repercusión electoral de cualquier decisión realmente estratégica. Pero también se hizo perceptible la multiplicación de habilidades y capacidades promovidas por la política de intensificación educacional y la densificación de cultura que de ello resultó. La brecha entre el segmento empresario-industrial y el clásico conglomerado agrario-comercial-bancario llegó a la anchura que suele presentar en determinados períodos y aun ésta fue incrementada por la política gubernativa. El crecimiento del Estado tendió inevitablemente a promover un ancho estrato burocrático de clase media que identificó sus intereses con la permanencia del proceso y sirvió con general adecuación la función de arbitraje y compromiso en la que el sector político-partidario dirigente, por encima (o tal vez por debajo) de colores históricos, se fue formando.

En este perfil de poder que resultó, a grandes líneas, el de todo nuestro siglo XX, no es difícil advertir tanto un nivel relativamente elevado de especialización de los sectores directivos como esa tendencia al entrelazamiento cuya estabilización representa, comúnmente, la vía de promoción de un auténtico grupo dirigente social unificado. Se-

gún los períodos y según las estructuras políticas se han registrado fases específicas de tal "interlocking". Muy notorio ha sido el promovido entre determinados núcleos capitalistas - empresarios y el elenco político. A través (aunque no exclusivamente) del Partido Nacional y del riverismo fue siempre notorio el que se anudó entre el sector estanciero y los cuadros parlamentarios (un fenómeno que las condiciones socio-electorales del interior del país facilitaron y facilitan mucho). También registraron múltiples entrecruzamientos el grupo de gestores industriales y los cuadros ejecutivos y administrativos más altos del Estado cuando advino la situación en que la prosperidad o la ruina en el sector productivo secundario dependió de una variada gama de decisiones gubernativas en materia cambiaria, comercial y fiscal. Otros modos de entrelazamiento se habían registrado, o se siguieron registrando, pero éstos fueron

Herrera (1873-1959): la puja en una participación ampliada.





Juan José Amézaga (1883-1956). La época de una alianza: negocios y economía dirigida.

menos decisivos. En cierta etapa creciente del país se pudo apuntar un pasaje regular de la élite intelectual a la dirección política cuando arribó la que es posible categorizar como una tercera generación de los niveles populares en que encontró su respaldo el batllismo. Duró poco. Más estable fue, en cambio, el desplazamiento del elenco burocrático-estatal a la dirección política, ya que implica un tipo de paso que la transformación de la administración en red de arrastre de adhesión partidaria iría haciendo crecientemente regular. Los capitales electorales formados en la gestión de todos los entes autónomos (y no sólo en los jubilatorios) habilitaron una transferencia que no puede dejar de considerarse un ascenso, si bien no incorporó a los cuadros de dirección política unos modos de acción ni una "mentalidad de status" sustancialmente distinta.

Con todos los matices y los agregados que puedan aportarse, tal es el panorama de la concentración del poder dirigente en el Uruguay hasta casi nuestros días.

LOS SECTORES

LA ELITE AGROPECUARIA

Sobre ella nos hemos extendido en repetidos pasajes de nuestro retrospecto histórico y su consideración debe forzosamente abreviarse.

Mención primerísima merece su poder económico. Si a este poder económico —en cuanto es mensurable en términos de participación en la riqueza total de la colectividad— nos atenemos, los establecimientos superiores a las 2.500 hectáreas —1.232, según cálculos de Trías sobre el censo de 1956; 1.212 en 1966, según estimación reciente de Quijano; 1.300, de acuerdo con el Instituto de Economía— representan el 1,53 % del número de fundos, mientras que su extensión asciende al 35,20 % de la tierra utilizada (5:245.349 hás.). A pesos de hoy, es difícil que el capital fijo y movible de esos establecimientos sea inferior a los 600 millones de dólares, lo que elevaría su ganancia global a unos 40 millones de dólares anuales si los porcentajes de rentabilidad calculados por el precitado Instituto en "El proceso económico del Uruguay" —del 7 % al 6 %— son los justos.

Difícilmente discutible —a la inversa de algunos de estos cálculos— es que en ese cupo de un millar y cuarto de establecimientos se sitúa la "clase alta ganadero-agrícola". Tiene en cambio algo de irreal la unidad "establecimiento" como sinónimo de unidad propietaria individual o familiar, puesto que inciden, en una cuenta socio-económica realista y no meramente catastral o fiscal, la concentración de predios en una sola mano, el fenómeno de las "sociedades anónimas del campo", la desconcentración deliberada a fines impositivos o meramente técnicos, y aun muchos ejemplos de desdoblamiento entre arrendadores y arrendatarios.

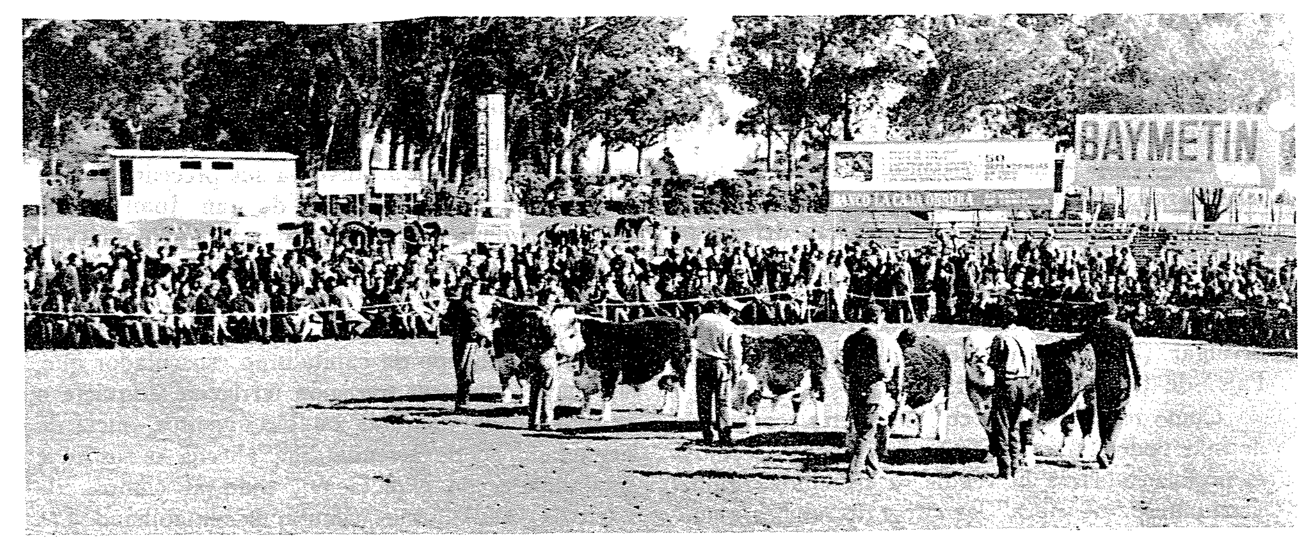
En cualquiera de los casos posibles hay que subrayar la gran concentración de propiedad en el

tope de la pirámide: Trías calculaba, sobre datos de 1956, 38 predios con 965.000 hás.; el Instituto estima 300 de más de 5.000 hás., asignándoles una ganancia líquida de 15 millones de dólares anuales. De esta crema emergen, como nombres y cifras legendarias, aun fijadas a diferente fecha, estimaciones como la de 139.000 hectáreas del grupo Martinicorena en 1962, la de 120.000 del grupo Gallinal, la del logro de 100.000 de J. Touron que la defensa oficiosa de un diputado se encargó de divulgar (declaraciones del Dr. Botinelli en "El País" de 14 de junio de 1961).

Como resulta común en los sectores económicos de más poder, a propósito de la élite agropecuaria es posible hablar a la vez de su estabilidad global (compárese "ut supra" las cifras de predios mayores de 2.500 y 5.000 hás. entre 1956 y 1966) y de su relativa movilidad individual y familiar. Sobre esta característica se requerirían, como es natural, complejas investigaciones; como no se han hecho, sólo cabe realizar alguna inferencia. Una lista medianamente amplia de las fortunas agropecuarias más publicitadas o notorias permite verificar el ingreso directo en este sector de grandes patrimonios —los del grupo Mahilos y del grupo Salvo han sido los más ostensibles— amasados originalmente en actividades diversas y en especial industriales. Pero este fenómeno sólo refleja el entrelazamiento natural, casi incoercible entre todos los núcleos de la riqueza e importa menos que el posible ascenso desde niveles medios o bajos hacia la cima. No se trata, pues, sólo del hacendado de regular patrimonio excepcionalmente hábil, sobrio y/o exitoso, sino de procesos (que por lo menos hasta no hace muchas décadas fueron relativamente frecuentes) en que se trepó al nivel superior y desde ocupaciones humildes (escasísimos; sólo se ha divulgado uno) o se hizo desde otras, ajenas a la actividad agropecuaria directa (comercio al por menor en las capitales del interior, remate de ganados, transporte, empleos precedentes en las secciones bancarias de crédito rural, etc.).

El ingreso de la inversión extranjera en este sector económico, que tuvo ya sus precedentes casi legendarios en "Los Cerros de San Juan" y en "Nueva Mehlen", agrega no sólo nuevos factores de movilidad sino que, en verdad, superlativiza un fenómeno de mayor hondura. Es el de la integración de la agropecuaria entera a los mecanismos de cierto tipo de capitalismo especulador que, sin mayor apego ni tradición terrígena, adquiere o se deshace de y liquida establecimientos, oficia de arrendador o de arrendatario, alterna o sustituye modalidades de explotación, todo al compás de estrictos y actualísimos cálculos de rentabilidad. Las grandes ganancias que hizo posibles durante el período batlleberrista la política de sostén a los precios agrícolas (en cuanto aseguró un superbeneficio al gran capital y a la gran extensión) representa probablemente la etapa decisiva de esta transformación de comportamientos y valores.

Tanto a esta altura de su desarrollo como desde muchas décadas atrás, la élite agropecuaria ha sido la más regularmente organizada y articulada del país, y aun la más percutiva y coherente en la presentación de sus reclamos. Fuerte en sus centros institucionales desde la Asociación Rural (1871) y la Federación Rural (1916), dividiendo entre ambas, desde la aparición de esta última, la gestión técnica y la acción político-gremial, la clase alta rural se ha beneficiado comúnmente con la invocación de las demandas de los extensos estratos que bajo ella pugnan, a veces difícilmente, por mantener su "status" y aun sobrevivir. Toda pugna sobre precios unifica al sector, aunque toda victoria en ella lo aventaje muy desigualmente. Merece también apuntarse el alto grado de "comunicación interna" que la élite rural posee, desmesurado en especial si



25 de agosto en el Prado: los animales importan más que los hombres.

se le compara con el que caracteriza a los niveles más bajos. En este punto la multiplicación de ferias, exposiciones, ventas en estancias y el incremento de los medios de desplazamiento (el avión es entre ellos común) no ha hecho más que acentuar el desnivel.

Las características anteriores contribuyen también a explicar la alta "visibilidad" de la élite agropecuaria. Propietaria de los medios de producción de las únicas riquezas básicamente exportables, cuestionadas como monopolizadoras de un bien crecientemente raro con efectos verosímiles de bloqueo sobre el desarrollo de las estructuras nacionales, son atacadas, variable pero coherentemente, por la baja productividad que su gestión empresarial alcanza. Y también por la magnitud de la ganancia "per capita" cuando ésta se mide de acuerdo con el monto de los subidos capitales que los integrantes del nivel más alto poseen. Desde 1958 el "campo" ha demostrado que no responde a los estímulos cambiarios ni a alicientes ni castigos fiscales con un incremento sustancial de la producción media; pese a ello el adensamiento y la tecnificación de la explotación agropecuaria ha irrumpido en la última década a la categoría de una meta nacional suprema, a la condición de salida visible del estancamiento y el retroceso.

Entre estas coordenadas se mueve el poder político-social del alto sector rural. Como la experiencia reiterada del país lo verifica, controlando un rubro comercializable de la índole de la lana, la retracción de las corrientes de venta suele significar, con la presión sobre un poder público débil o complaciente, la devaluación monetaria inevitable. Y si con esa forma estratégica de poder que es la capacidad de "veto" quiere medírsele, recuérdese la suspensión indefinida que desde 1963 sufre la ley que deroga la posibilidad de las sociedades anónimas rurales.

En una sociedad del tipo de la nuestra, quien dice poder económico dice prestigio. Las muestras de agosto en el Prado son, desde hace más de medio siglo, uno de los grandes eventos nacionales. Y a ello hay que sumar todavía el otro prestigio que rodea, en todas las sociedades de propiedad privada, la propiedad de la tierra en particular. Ninguna otra modalidad de dominio llega en este orden a comparársele.

LA ELITE MERCANTIL

Vieja es la tradición comercial de Montevideo y la función del país circundante como zona de su influencia. Menos dilatada es la historia de sus bancos, vinculada en su origen a la plena inserción del Uruguay en la órbita capitalista mundial. La interesante figura del Barón de Mauá llena toda una época de inseguro crecimiento y, tras ella, la de Reus, hacia 1890, daría el sello a la gran aventura especulativa que el país tardó tanto tiempo en olvidar. De todo ese período sólo sobreviviría una empresa, el Banco Comercial (1857), cuya "prudencia" (que lo salvó de las tormentas), cuya indiferencia a todos los infortunios colectivos, cuya omisión de todo gesto de apoyo a los poderes del Estado en los más urgentes apremios comunes, lo convertiría en el más completo dechado de lo que un banco, en las estrictas e implacables ética y lógica del capitalismo, debe ser.

Con los bancos nacidos hacia el filo del 90 y los que tras ellos se fundaron hacia el 900 y con el Comercial como decano, el sector bancario fue incrementando pausadamente su poder. Con todo, puede decirse que hasta la quinta década del XX ese poder estuvo vigorosamente contenido por el crecimiento paralelo de un sistema bancario estatal, dotado, desde un cuarto de siglo antes, de fuertes tradiciones institucionales, provisto de un alto sentido de servicio público, armado de monopolios eficaces y resguardado, al menos por más tiempo que otros entes públicos, de la erosión envilecedora de la política menuda.

Hay que saltar muchas escalas intermedias para llegar al presente y baste decir aquí que el crepúsculo del aparato bancario oficial fue la condición para que la superpotencia bancario-comercial se erigiera en "sector hegemónico" dentro del



Bolsa de Comercio: el juego de los "valores" y un solo valor.

sistema de nuestra economía. Más dudoso es —la opción tiene que estar bastante teñida por la ideología— si el deterioro de los entes bancarios estatales por la ineptitud, por la corrupción directiva y la mediocridad gerencial, por la mediatización a las urgencias monetarias y fiscales del Estado, respondió o no a un "plan". Es decir: si obedeció a un programa alentado desde esferas gubernativas e instrumentado por los grandes intereses económicos privados, o resultó, por el contrario, el corolario no querido de un derrumbe general. Más prudente parece la segunda suposición aunque, especialmente en los últimos tiempos, no sea fácil de refutar la primera.

De cualquier forma que sea, las consecuencias han sido unívocas. Desde la difusión del uso del redescuento como recurso de regulación monetaria, su excepcional potencialidad de ganancia multiplicó, en las últimas dos décadas, el número de establecimientos bancarios. Los Nros. 20 y 26 de ésta colección han subrayado los arbitrios que, tras él, el sistema bancario utilizó desaprensivamente. El control del 80 % de las exportaciones, de la moneda, de la industria, la entrada a fondo en los negocios de la propiedad y la locación inmueble (obstáculo formidable a la formación de la familia uruguaya), las abismales diferencias en las tasas de interés entre las del dinero recibido y el prestado en términos de usura, el juego contra la moneda nacional y la cruda provocación de las sucesivas devaluaciones que el país ha sufrido, la ocultación contable de enormes ganancias, con fines de evasión fiscal o de recorte del beneficio accionario, la responsabilidad mayor en la fuga de capitales hacia el exterior (292 millones de dólares entre 1962 y 1967), la utilización de las "sociedades financieras" como medio de dispersión empresarial y de elusión de algunas restricciones legales, todo este lote, repitamos, es harto bien conocido por la opinión ilustrada del país y los escándalos de 1965 y años posteriores lo han subrayado con feliz e inesperado énfasis. La reflexión histórica se inclina a registrar un sugestivo paralelo entre las formas clásicas de la piratería, que tanta influencia tuvieron en la "acumulación primitiva" que habilitó el ascenso capitalista, y este repertorio de modalidades que parecerían marcar su crepúsculo.

También han tomado estado público los dos procesos, sólidamente interrelacionados, de extranjerización (en 1963 un 9 % del capital era foráneo; en 1968 llegaba al 45 %) y de concentración de la banca, acelerados tanto por la crisis bancaria del 65 y la pérdida de confianza en la gestión nacional como por las propias necesidades de expansión de los gigantes bancarios norteamericanos y europeos. Agreguemos a estos factores, frecuentemente subrayados, que dentro de una estricta lógica de las estructuras económicas, resulta perfectamente coherente que el "sector hegemónico" dentro de ellas asuma (aun en las áreas subdesarrolladas) las características formales "más avanzadas" del modo de producción dominante.

Enérgicamente liderado por la Asociación de Bancos, hay variados indicadores de esta condición hegemónica de que hablamos. La callada hibernación de la norma derogatoria de las financieras (ley 13.330; artículo 504 de la Rendición de Cuentas de 1966) representa sólo una muestra de su eficacia en cancelar los pocos preceptos realmente incómodos que la autoridad pública tiene, en oportunidades de alarma social, que adoptar. Se ha calculado que entre 1939 y 1959 la banca oficial cedió a la privada el control de 2/3 de los depósitos y las colocaciones. Pero esta cesión de terreno pudiera haber estado neutralizada por una acción de supraordinación y control por parte del sistema bancario estatal. La ley de 1935 sobre integración del Consejo Honorario del Departa-



Directorio del Banco Comercial en 1925. La continuidad de un espíritu: la desconfianza hecha virtud.

mento de Emisión (de la que saldría en 1966 el Banco Central) partía del supuesto de una diferenciación de los intereses agropecuarios y comerciales y los intereses de los banqueros; partía también de una presunta vivencia de cierto "sentido del Estado" en los integrantes de derecho de la mayoría de ese Consejo. Cuando esas diferencias se minimizaron a través del activo entrelazamiento intersectorial, cuando ese sentido del Estado quedó sólo en la cáscara de las frases, la banca privada se encontró controlándose a sí misma, esto es decir: autorregulándose. Y parece que la creación del Banco Central, caído, tras breve lapso, en manos de los "hombres de negocios", o de sus agentes, no alteró sustancialmente la situación.

Si se analizan los apellidos del segmento director bancario y su alto coeficiente de continuidad familiar, se hace evidente que él configuró antes que otros un centro de intercambio de "roles" y funciones con los restantes sectores económicos. Al principio esta unión es ostensible con el grupo alto estanciero, aunque no hayan faltado linajes de actividad específicamente bancaria. La industria irrumpiría después, como lo marcó en cierto momento algún banco, aportando algunas de sus figuras más exitosas. En tiempos más cercanos, sin embargo, y contribuyendo a ello la índole compleja y aun riesgosa de muchas de sus actividades, el lote banquero ha incorporado a sus filas hombres formados desde niveles algo más inferiores. Se trata, como es habitual, de una selección de los más competentes (o los menos escrupulosos, que en este ramo de servicios quiere decir, "grosso modo", lo mismo).

Menor parece hoy el poder, aunque también posee interesantes peculiaridades, del tradicional sector del alto comercio. Altamente beneficiado

por las sucesivas devaluaciones a través del mantenimiento de stocks y del remarcado de precios, la reforma cambiaria de 1958 alteró, empero, la situación de semimonopolio que implicó para él la importancia de los "antecedentes" en el régimen de "cuotas" y sus derechos eventualmente enajenables.

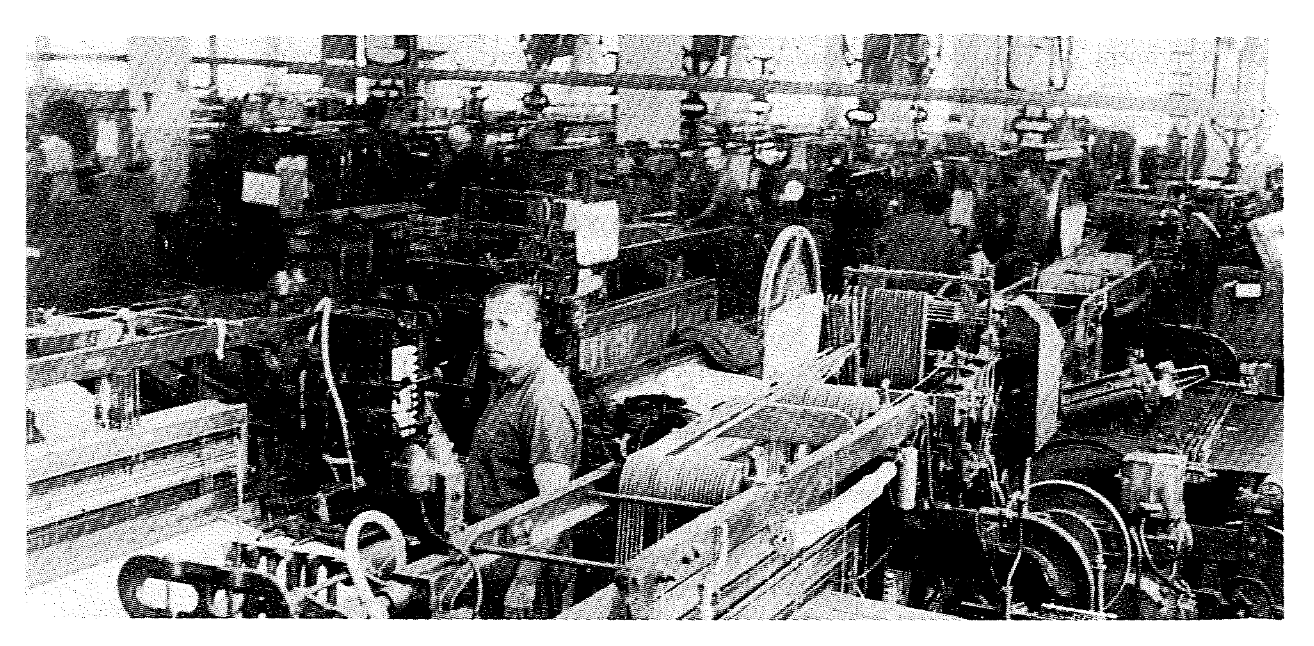
LA ELITE INDUSTRIAL

Hay acuerdo casi universal de que en todas las sociedades de crecimiento retrasado ha sido el proceso industrializador el factor desencadenante de un ascenso a más altos niveles de desarrollo e integración sociales. Y si esto es así también lo es que, salvo en los contados casos en que la gestión de este proceso fue asumida originariamente por el Estado, la formación de un núcleo empresario promotor ha sido condición imprescindible de su existencia.

Las primeras manifestaciones de la industrialización se dieron en el país en forma más temprana de lo que algunos esquemas suponen. Ya se decía que la misma naturaleza de la producción exportable reclamó, desde los primeros tiempos, la actividad del saladero; y aun podría agregarse que determinadas manufacturas —velas, carros, etc.— fueron reclamadas por el medio y las dificultades de abastecimiento.

De cualquier manera es lógico tomar como punto de partida de un empresariado industrial definido el cuarto tercio del siglo pasado y lógico también marcar la importancia de las primeras leyes proteccionistas (1875-1888). Como ha ocurrido por lo regular, fueron las actividades industriales "livianas", dirigidas al consumo y de "protección necesaria", las que primero —y por larguísimo lapso— tuvieron viabilidad. Con la habitual carencia de estudios sobre el tema, puede afirmarse que no es claro el origen social y económico del primer empresariado industrial. Aventuremos, a título de hipótesis, que pudo provenir en algunos casos de la artesanía de taller y en otros de una inmigración pequeño-industrial europea con tradiciones artesanales. Esto en los comienzos, tal vez como trazo dominante. Pero la acción empresaria de familias como los Salvo permite inferir que bastante tempranamente (1897 en su caso) se marcó un plano de pasaje entre el comercio y la industria. El proceso se agudizó en épocas posteriores, en especial durante las dos guerras mundiales con su brusco incremento de la actividad industrial a impulsos de la sustitución de importaciones. Es lógico que quienes poseen un establecimiento mercantil que se ve privado un día de sus fuentes de suministro traten de agenciárselos por sí mismos.

Todo esto, repetimos, es hipótesis. Pero hipótesis que cabría verificar o desechar con las historias personales y familiares de los protagonistas más notorios de esa etapa del proceso. Lo que casi por sí permite una nómina preliminar de esos protagonistas es establecer la índole no-tradicional y aun casi siempre neo-burguesa de ese sector social y la acentuada preeminencia de determinados orígenes nacionales, que aquí fueron seguramente el italiano y el catalán (más algunos franceses, alemanes, etc.). Casi obvio es decir que para esa capa empresaria el éxito de sus propósitos se tradujo en un enérgico impulso social ascendente y —el fenómeno es general en América pero más intenso en la colectividad móvil y abierta que fue la uruguaya— en el entrelazamiento con los núcleos más tradicionales de la propiedad estanciera y comercial. Menos segura es la inclusión de ese empresariado en algunos de los diversos tipos que algunos sociólogos especializados en el punto —caso de Henrique Cardoso —han declarado para el patro-



La emergencia del poder industrial.

nato industrial. Puede suponerse que, dentro de los modestísimos parámetros técnicos y económicos en que se movieron, tendieron a acercarse al tipo de "industrial puro" y aun al del "empresario puritano", definido como "aquel al cual su orientación lo lleva a un incremento de la racionalidad a nivel puramente interno de la empresa".

Hacia 1930, al estímulo de la persistente acción promotora que el batllismo cumplió, el Uruguay había accedido a determinada altura de actividad industrial que, tal como se exhibió en la exposición del Centenario de la Constitución, parecía satisfactoria. La muestra bien puede verse hoy como el cierre de una época. Y como el prólogo, a su vez, de una segunda etapa en la que, en estrecha correlación con profundos cambios estructurales de la sociedad uruguaya, un nuevo empresariado industrial en nuevos ramos —neumáticos, procesado de lanas, frigoríficos de asiento formalmente nacional, metalurgia, carrocerías, etc.— crecería al impulso del proceso ya referido de sustitución de importaciones. Como no hace mucho se ha alegado con brillo, tanto las secuelas de la crisis económica de 1929 como el conflicto mundial (1939-1945) representaron un período intenso de debilidad coyuntural del capitalismo, que tuvo la consecuencia de dotar a los procesos industrializadores de los países dependientes de un margen de autonomía del que hasta entonces habían carecido.

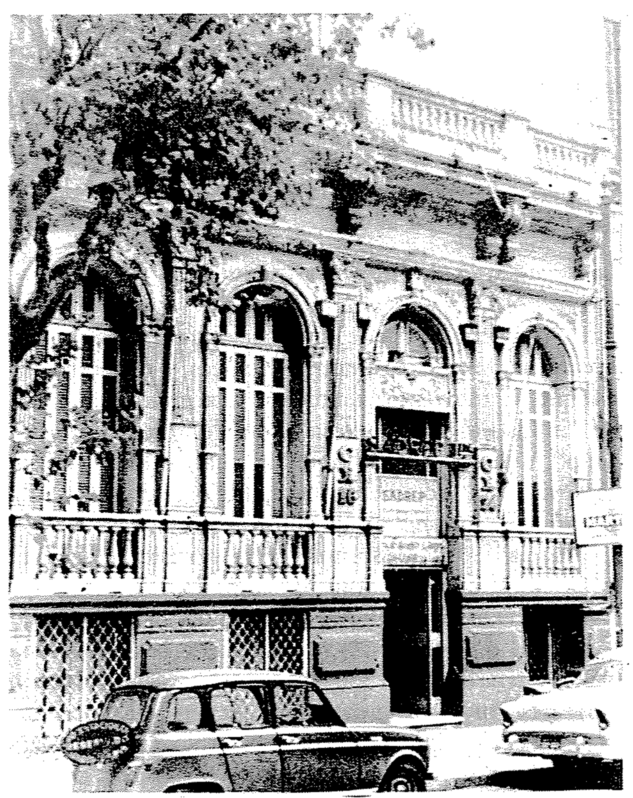
En tal contexto surgió nítidamente un nuevo estilo de gestión patronal: las tipologías ya referidas lo designan como el del "empresario especulador" y del "empresario desarrollista pero especulador", sin un muy claro deslinde (a nuestro pare-

cer) entre ambos. Con la visible preeminencia de la primera de estas dos modalidades, la élite industrial uruguaya pudo lograr un peso considerable dentro de la estructura económica nacional de las dos últimas décadas. Contrajo en este lapso esa alianza (que Bourricaud señala para toda Latinoamérica) con sectores agrarios más regresivos que ella misma y que son, justamente, los que constriñen una expansión del mercado que sería la única vía idónea para asegurar su desarrollo más firme. Otros análisis han subrayado el contraste entre su alto grado de capacidad acumulativa y su permanente dependencia del exterior en materia de maquinarias, suministros y técnicas. Cuando, tras 1945, la aludida debilidad coyuntural del capitalismo fue enjugada, se intensificó el proceso de extranjerización del empresariado industrial que hasta hoy ha proseguido sin pausas. Ya sea a través de establecimientos filiales, ya por la asociación o inversión en empresas nacionales con dificultades técnicas o financieras, ya vinculando al negocio de importación una etapa industrial de armado y terminado, debe señalarse la preeminencia o la entidad de la intervención y gestión capitalista extranjera en ramas tan diversas como la metalurgia (en especial metales livianos), los productos químicos y farmacéuticos, los textiles (tanto de lana y algodón como de fibras nuevas), la electrónica y la electricidad, la cartonería, la cerámica, las pinturas, las bebidas sin alcohol, la cerveza, el aceite, el azúcar, la molienda y muchas otras.

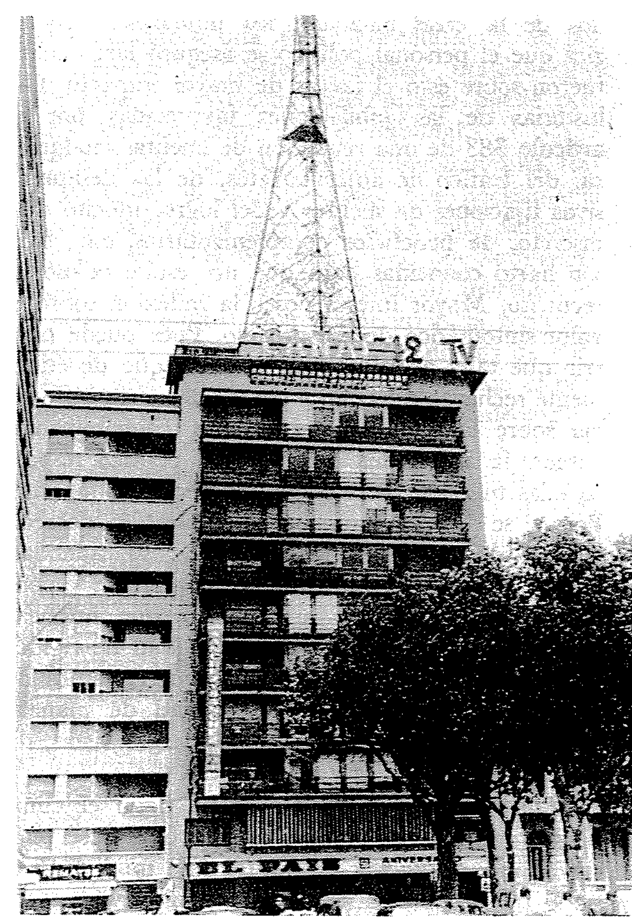
Batido desde un flanco por la intromisiva participación foránea, el empresariado industrial uruguayo ha sido incluso incapaz de articular la respuesta de una ideología industrializadora cabalmente profesada o de ser, por lo menos, fiel a los esbozos que de ella se habían intentado. Punto menor sería que la involución económica uruguaya no hubiera permitido alumbrar lo que las tipologías empresariales ya utilizadas designan como el "hombre de empresa moderno" o el "capitalista moderno".

LA ELITE DE LOS MEDIOS DE DIFUSION

Cuando constituía el único medio de comunicación masiva, la prensa fue en el Uruguay, hasta no hace muchas décadas, más que nada un instru-



SADREP: también el aire tiene amos.



Prensa y T. V.: la industria de la trivialización en masa al servicio del sistema de dominio.

mento de lucha partidaria e ideológica. Lo que quiere decir también: sólo muy raramente un "negocio", una actividad encarada con los criterios de producción capitalista y evaluada de acuerdo con pautas determinadas de rendimiento. El fenómeno es general a toda el área de Occidente y ninguna originalidad presenta el proceso en el país.

Ninguna originalidad tampoco asumió, digámoslo lealmente, el curso de los hechos que han llevado a una condición diferente a la prensa periódica y a los medios laterales (radio y televisión) que el proceso técnico alumbró. Un factor específico, sin embargo, está representado por el hecho de que, tomando pie en algunas disposiciones de gobiernos de la década del 30 destinadas a moderar la oposición periodística, los poderosos intereses centrados en la Asociación de Diarios del Uruguay fueron capaces de asegurarse por más de dos décadas la multimillonaria regalía que representaron tipos cambiarios especiales (y cada vez más diferentes al general) para la importación de sus insumos. Fuerte grupo de presión, puesto que actúa sobre las opiniones más desinformadas, que son las mayoritarias, no tuvo más que invocar, con el énfasis debido, la presunta función cultural y formativa que alguna vez (pero en el pasado) había cumplido y los solemnes fueros de una "libertad de expresión por la prensa" cuyo ejercicio efectivo sólo está al alcance de un puñado de intereses y familias.

Hasta que el privilegio no se hizo demasiado escandaloso y más corto el paño en que había que recortarlo, poco trabajo tuvieron en sostener la fuerza de estos argumentos.

Escasa es, en términos generales, la sustantividad de la élite de los medios de difusión y acentuados sus vínculos de dependencia con la política (en especial la de la prensa) y la bancaria, agraria e industrial (las de la radio y TV sobre todo).

Pero su privilegiada situación de intermediaria con el exterior, la posesión de los canales de notoriedad y de prestigio es capaz de conferirle poderes que, aun sin regalías cambiarias o impositivas, está perfectamente en condiciones de cobrarse (en cargos diplomáticos, en bancas legislativas y en otras numerosas, variadas formas).

EL PERSONAL POLITICO

No han dejado de insistir estas reflexiones sobre la correlación entre un Estado instrumentador de equilibrios sociales más o menos estables basados en el compromiso y la emergencia de un personal político experimentado en él. Pero para esta emergencia algunas condiciones debieron darse y las más importantes fueron la extensión de la participación política hasta un nivel de relativa "verdad electoral" y el fortalecimiento de unas clases medias urbanas y rurales en las que buena parte de ese personal se reclutó.

El acentuado amorfismo organizativo de los partidos mayoritarios y la creciente canjeabilidad de sus posiciones y sus ideas han acentuado entre este personal un sólido espíritu de cuerpo, que a altura parlamentaria se expide sin cesar en reconocimientos "supra partidarios" de numerosas figuras; desde hace algunas décadas —con todo un repertorio de franquicias electorales al alcance de la mano— se hicieron posibles múltiples modos de aventurerismo político menudo que han llenado bancas con investidos que a nada ni a nadie responden. Inversamente, esa misma carencia de estructuras definidas ha cancelado casi por completo el aporte de la capacidad ostensible, de esa capacidad a la que, por todo lo alto, convoca la elección de un jefe acatado. Por si faltaran ejemplos, digamos que ciertas selecciones hechas por Herrera o por Luis Batlle no serían posibles hoy; añádase, todavía, que el tipo del "intruso político" al que poco más abajo se hará referencia diverge grandemente del caso anotado.

Como ocurre en casi todas partes, el prestigio social del personal político ha sido por lo regular pobre y la baja cotización se acentuó aun durante las últimas décadas. Más tal vez que su notoria inefectividad en enfrentar los síntomas indisimulados de la crisis nacional, los numerosos privilegios que el personal político se aseguró largamente fueron sobre esto el factor de mayor impacto. Las historias de las jubilaciones favorecidas por el artículo 383 de una rendición de cuentas cualquiera, del tráfico de autos baratos, de las desaprensivas fijaciones de sueldos y del logro, mucho más discreto, de beneficios complementarios, etc., etc., son harto conocidas para que no resulte ocioso su recuento. Mayor interés posee la reflexión sobre el valor sintomático de ese proceso. Pues puede ocurrir que tales arbitrios, con todo lo que de éticamente rechazable tengan y con su deletérea influencia sobre la totalidad del sistema, contribuyan a acrecer la autonomía del personal político respecto a las fuerzas y a la estructura social dominante. Pero si se dice autonomía se dice también decrecimiento de su instrumentación, de su fidelidad eventual a los movimientos presuntamente espontáneos de la opinión pública. Lo que implica, a su vez, la doble, ambigua posibilidad de rigidez de actitudes, y ceguera ante nuevos reclamos de la realidad, pero también capacidad de planear una línea política de alto vuelo y largas vistas, de salvarla de desánimos y alternativas.

Entre estas coordenadas se ha dado el curso último del personal político uruguayo. Y obsérvese, sin ánimo de agotar el punto, que muy distinto signo pudo tener la autonomización privilegialista del personal político en "un Uruguay de compromiso" y algunos aislados gestos de hoy de resistencia al tipo del "intruso-político-empresarial". Sobre tal situación incide la reordenación de la relación de poderes que involucró la carta constitucional de 1966: tanto la pretensión de planificar y tecnificar la gestión del Estado como de alumbrar institucionalmente un liderazgo más o menos "carismático", atenta contra la cuota de poder del personal político. Cuando, como al presente, se

produce un fenómeno de entrelazamiento entre aquel liderazgo y una activa concentración de poder económico, la "disfuncionalidad" político-legislativa ante el "proyecto" preconizado puede presentar otro semblante que el habitual.

Para hacer de esta disfuncionalidad una formal corriente de réplica —hay que decirlo— el personal político uruguayo se halla muy defectuosamente integrado. Y esto no sólo por la preeminencia (ostensible, pese a la falta de investigaciones sobre el punto) que asume en él la representación de las clases medias y aun dentro de ellas el sector profesional liberal, lo que también importa decir su indefinición y contradicción ideológicas y su ambigüedad de implantación social. En el interior del país el personal político muestra una sobrerrepresentación del sector estanciero y, tal vez en grado mayor aun, de los grupos intermediarios (comerciales y profesionales) que trabajan más estrechamente vinculados a él. A esto todavía habría que agregar que, como es normal dentro de los regímenes de compromiso o de "poder económico externo" dominante, los sectores más capaces, abnegados y lúcidos de las nuevas generaciones tienden a desglosarse de todo personal político de trámite. Un fenómeno, agreguemos, que sólo se cancela pasajeramente en los regímenes de "movilización revolucionaria". Por lo que, fuera de ellos, tiende no sólo a hacer descender drásticamente el nivel medio de capacidad de ese personal sino a quitarle toda acción de iniciativa frente a los invasores poderes sociales que buscan constreñirlo.

LA ELITE ADMINISTRATIVA Y TECNICA

Ocurre regularmente que un Estado moderno integra el nivel superior de su frondosa plantilla burocrática a la estructura del poder formal y a los procesos de decisión que dentro de ella se cumplen.

Distintas son todas las administraciones del mundo y en cada una ese tope superior se compone de modo diferente. En el Uruguay puede considerarse compuesto por los miembros de los directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, por sus directores unipersonales y sus frecuentísimos interventores, por los directores generales de los ministerios y los de algunas oficinas y servicios de especial relevancia (caso la de Planeamiento y Presupuesto). También por los escalones más elevados del Poder Judicial (Corte y Tribunales), por el personal superior diplomático, por los jefes de policía (sobre todo el de Montevideo, tan decisivo), por los integrantes de algunas juntas y comisiones de fin especializado y, en general, por los titulares de los llamados "cargos de particular confianza". Es fácil ver que tales inclusiones plantean la cuestión del distingo y la identificación entre el área administrativa y el área técnica y aun el desglose de los que, con eficaz expresión, se llaman los "especialistas" y los "generalistas". Dígase igualmente que, en una primera ojeada, parece razonable englobar en este rubro a todos los investidos con funciones formales, institucionales, dentro del sistema estatal. Siempre, claro está (pues ellos forman otra categoría ostensiblemente heterogénea) que no estén condicionados por un pronunciamiento electoral o no sean, como los ministros y sus adláteres, política y directamente responsables.

Intenso es el debate que en la sociología de la burocracia se libra sobre la sustantividad o la dependencia de este sector, tanto respecto a aquel personal electivo y movible como a los grupos estratégicos de poder económico privado cuyos intereses estos administradores, en su gestión, pueden

afectar tan considerablemente. En el punto, como es obvio, se involucra la cuestión mayor de la autonomía de acción o la docilidad instrumental del Estado mismo, un dilema en cuya opción cabe advertir que pesan decisivamente prejuicios ideológicos antagónicos y la atención a modelos nacionales concretos que no tienen por qué ser los más comunes. Sin ánimo de remontarnos a tan enrarecida atmósfera señálese, sí, en la forma más neutral posible, que del grado de independencia y del grado de coherencia de ese estrato numéricamente breve de "grandes funcionarios" (Bernard Gournay) depende su deslinde como élite identificable. Digamos también que en el Uruguay, como en cualquier otra sociedad dada, tales calidades son efecto, para este sector, de una serie definida de variables. Ellas son las del origen social, las formas de conscripción, la estabilidad, el nivel de vida e ingresos, la identidad de formación, el margen de autoridad y autonomía operativa, el peso en las decisiones capitales y la responsabilidad que ellas irroguen, la medida y la dirección de su integración al marco político y estatal y a la sociedad global.

Ningún espacio tenemos para un examen medianamente cuidadoso de estas variables (sobre las que falta, como es tan común a nuestro tema presente, cualquier estudio específico). Del origen social del sector puede aventurarse que se sitúa regularmente en los varios niveles de nuestra extensa clase media, con probable insistencia en la clase media profesional. De sus formas de conscripción cabe afirmar que la primacía del canal de ingreso político ha resistido victoriosamente toda la larga serie de leyes enderezadas a asegurar la incorporación y la promoción conforme a criterios objetivos de competencia. El Servicio Exterior es tal vez la más detonante muestra de esta contradicción entre el voceado propósito y la desaprensiva digitación. Pero también en los entes autónomos del Estado (puesto que el control del Senado ha sido casi sin excepciones nominal) se puede marcar —y es absolutamente ocioso extenderse sobre el punto— el mismo fenómeno. El caso tan conocido del legislador que ha perdido su banca y es candidato predilecto a dirigir cualquier actividad bancaria, industrial o comercial no es el peor, y esto no es poco decir. Únicamente en aquellas funciones reservadas a algunas carreras profesionales puede aceptarse que actúa un mínimo de exigencia selectiva, aunque también es obvio que un mismo título recubre siempre valores, alcances e imponderables humanos muy disímiles, y ello no sólo en lo intelectual.

Mayor era la estabilidad pasada del sector que aquí examinamos, puesto que la declaración de "cargos de particular confianza" conferida a buena parte de éstos a fines del segundo colegiado la ha disminuido mucho. Como ha sido tradición de la sociedad política uruguaya que los daños no lleguen hasta la sangre —por lo menos en cuestión de intereses— hay facilidades jubilatorias para varios de estos núcleos, por no mencionar el caso especial de los directorios autónomos beneficiados por fluidos y jugosos retiros. Con tal referencia tocamos el punto del nivel de ingresos y vida del alto estrato administrativo y técnico, del que se puede decir que, como es regular en casi todos los países, no es de los mejores ni tampoco de los peores. Bastante inferior al de similares escalones en el orden privado (cuando cabe esta similaridad), como sucede también en casi todas las sociedades de nuestro tipo, es en la actualidad más bajo de lo regular en la plantilla judicial y policial. Es, en cambio, ostentosamente alto en ese escalafón diplomático que el personal político se reserva tácitamente como eventualidad de reposo y posibilidad de acumular apreciables fortunas. Cierto es

también que aun en los casos más desfavorecidos operan privilegios compensatorios (locomoción, abundantes viajes al exterior, jubilaciones especiales) que llegan a hacerlos atractivos.

Poca comunidad de formación (ese enérgico sello que marca a los "grandes funcionarios" franceses) se muestra en el sector administrativo-técnico y sólo los provenientes de una carrera profesional determinada amortizan la general ausencia.

Tema mayor representa el margen de autoridad e influencia de esta élite en las decisiones públicas mayores y en la instancia —a veces decisiva— de su ejecución. Hablando en términos generales, esa autoridad y esa influencia dependen del contexto político-social en que actúan y de la orientación dominante. Ensancha o estrecha grandemente sus poderes el que esta orientación vaya hacia el compromiso social y el prorrateo de demandas o siga una tendencia más unívoca hacia una determinada meta, el que actúe bajo el apremio de la resonancia electoral o decida con mayor libertad. También está condicionada, pero en proporción menor, por las corrientes ideológicas y partidarias a las que ese personal responda y por el grado de su integración y aun de "visibilidad" en las escalas más altas. (Entre 1950 y 1958 la Suprema Corte de Justicia vivió en este aspecto una época de oro.) El fenómeno de índole más regular probablemente sea el de que, presionado entre las preferencias del personal político "stricto sensu" y la incidencia de los grupos de capital, sólo disponga de la pulcritud en el estilo de la implementación que puedan prestarles una capacidad y un sentido de servicio público menos raros de lo que suele pensarse. Dispone también de otra facultad importante y que es frecuentemente utilizada: la de la renuncia y la denuncia. Ambas pueden adquirir considerable significación política, aunque detonen con más fuerza fuera del ámbito administrativo-técnico que acaba de abandonarse.

Estas modalidades y constricciones de la acción son de especial relevancia en el plantel de técnicos, al que el auge de los reclamos de planificación económica y social y las innovaciones institucionales de la Constitución de 1966 (Banco Central, Oficina de Planeamiento y Presupuesto) dotó de una expectabilidad y una influencia que la posterior orientación gubernativa retacearía drásticamente poco tiempo más tarde.

LA ELITE ARMADA

Difícil es deslindar una selección elitaria, poseedora de una porción efectiva de autoridad y de influencia, dentro de los cuadros, forzosamente más vastos, de la oficialidad militar, naval y aeronáutica. Siendo nuestra marina de guerra casi puramente nominal debe decirse que se ratifica entre nosotros, con más fuerza aun que la que tiene en otras naciones latinoamericanas, que es en los grados más altos del escalafón militar y aeronáutico que aquella élite debe ser regularmente identificada. Dentro de ellos, todavía, postulemos que la operación puede circunscribirse a los oficiales con mando efectivo de fuerzas, en especial los jefes de las varias "regiones militares" del país, los Inspectores Generales de las armas, etc.

Lo anterior comporta inevitablemente una limitación más. Y es que salvo el caso, entre nosotros poco perceptible, de auténticos liderazgos militares, son los jefes en servicio efectivo los integrantes potenciales de la élite militar. "Élite funcional" por antonomasia, la situación de retiro la cancela más o menos drásticamente, una característica que imprime a esa élite una movilidad infinitamente mayor que la que exhibe cualquier otra.

Como por razones que no es posible recapitular aquí nuestras clases altas despreciaron persistentemente la vocación militar, ha sido (es fenómeno común latinoamericano) en las clases medias, en especial en las del interior y con un fuerte coeficiente de continuidad familiar, que la oficialidad de las fuerzas armadas se reclutó y continúa reclutándose.

El origen modesto y la conscripción relativamente abierta de esa oficialidad debe contrastarse (y aquí también se alude a un hecho universal) con el extraordinario peso que los factores de socialización poseen en las fuerzas armadas. Dice verdad Mills cuando afirma que ellas representan la institución en la que menos importa de dónde se viene y más lo que modela y hacia dónde se va.

A este respecto podría esquematizarse bien el desarrollo nacional en dos etapas (una tercera se halla todavía en las tinieblas de la incógnita). En la primera, que más o menos llega hasta 1940, la oficialidad fue adiestrada en la misión clásica de guardia del orden y defensa de la soberanía nacional ante un ataque de tipo ortodoxo. Tras 1940, y al compás de los dualizadores conflictos mundiales y del proceso de regimentación panamericana estipulado y propulsado por los Estados Unidos, esa misión fue rápidamente reformulada. Al implícito, pero tenue contenido ideológico que yacía en aquella concepción clásica, se le insufló el otro más ostensible y desafiante de defender los valores "democráticos" y "occidentales" frente a un enemigo ahora eventualmente interno y clandestino. Como la misión tradicional no podía ser ni fue formalmente clausurada, los conflictos entre ambas no han dejado de expresarse reiteradamente y aun investirse en dos tipos diferentes de conductor militar.

A partir del convenio militar de ayuda concluido con los Estados Unidos en 1953 y de la corriente, continua desde esa fecha, de oficialidad nacional hacia ellos o hacia zonas satélites, fue perceptible la intensificación de ese factor socializador que tanto impacto ha ejercido sobre otros ejércitos latinoamericanos. Al perfeccionamiento técnico, cebo del intercambio, se le adosó una activa práctica de conformación mental cuya incidencia se acrecentó con la previa postura deliberadamente "apolítica" de un ejército como el nuestro. De esta conformación no podemos detenernos mucho en su contenido, en su intención ni en su evidente eficacia (por lo menos a corto plazo). Del primero recordemos, sí, que pautado en los cerrados ambientes del "pentagonismo" estadounidense, parece haber consistido en una peculiar interpretación de la "democracia" y en un "anticomunismo" que en los propios Estados Unidos sólo asoma su cabeza en los círculos más estrafalarios de la ultraderecha "birchista" y en las zonas más reaccionarias del Medio-Oeste. En cuanto a su intención, no es arriesgado sintetizarla aseverando que ella fue la de formar guardias fieles y asintientes a cualquier designio que el superpoder mundial norteamericano pueda abrigar. Sobre la efectividad de su impacto advirtamos que si bien, como se decía, en general consiguió sus fines, ejemplos aleccionantes como los cercanos de Perú y de Bolivia prueban que la mentalidad militar, formada, quieras que no, en la visión de la totalidad nacional y enfrentada lealmente con los fenómenos envolventes de la explotación y el despojo, de la dependencia y del deterioro de todo el sistema político, es capaz, sin andadores, de generar sus propios contravenenos.

Nada prueba que las fuerzas armadas, superando su ominoso desmantelamiento ideológico y emocional, no puedan fijarse metas más altas que la de ser celadoras de los pueblos que las pagan,

en beneficio del patrón extranjero o nacional que al mismo tiempo las halaga y las desprecia. En el Tercer Mundo y, en especial, en los países islámicos, se corrobora con abundancia esta esperanzada negación.

A través de todo este proceso, la élite militar es probablemente la que mantiene vínculos más estrechos con la "variable externa" de nuestro sistema de poder (los Estados Unidos). Esto por lo menos desde hace dos décadas. También son múltiples y continuos sus lazos con el personal político. El ideal de una fuerza armada neutral, técnica y obediente, nunca consiguió evitar que cierto partidarismo menudo pesase mucho en la designación para determinados cargos (inspecciones generales, jefaturas de región) y el fenómeno, antes aludido, de politización capital no modificó en esto el cuadro. La estructura productiva uruguaya no ha hecho factible, en cambio, relaciones directas entre el sector militar y el poder empresarial. En el caso de anudarse, sería por medio de comisionistas u otros intermediarios que ello ocurriría.

LA ELITE PROFESIONAL

El ascenso del prestigio social del letrado es inseparable de dos procesos: el que lleva hacia el "Estado de derecho", con su ideal de actividad normada, y el que consolidó las formas burguesas de propiedad santificadas en un código.

Si éstos son los factores universales, hay que agregar que en los países latinoamericanos la abogacía fue no sólo uno de los pocos canales abiertos al ascenso social no condicionados por la fortuna: también las modalidades culturales de nuestro pasado, la índole generalizadora, verbalista, oratoria de la práctica política, periodística y legislativa cotizaron las modalidades y limitaciones del abogado más allá de lo normalmente concebible.

El prestigio del médico fue seguramente algo posterior y aparece coetáneo al desarrollo de una química, una fisiología y una biología puestas sobre serios fundamentos. Cuando esta evolución se encontró con el valor normalmente supremo asignado a la salud y, sobre todo, a la vida misma,



Fuerza de represión o Ejército de los Andes: inexorable dilema de toda institución armada latinoamericana.

la "profesión hipocrática" subió hasta el nivel en que hoy, pese a esporádicas crisis, se encuentra. Desde Fermín Ferreira, Teodoro Vilardebó y Gualberto Méndez hasta Soca, Morquio y sus sucesores, el Uruguay ha reflejado puntualmente este proceso. Vale la pena observar todavía, pues se relaciona especialmente con nuestro tema, que paralelamente al curso de la continua victoria sobre las enfermedades y a la prolongación de la vida media del hombre, algunas especialidades médicas han cobrado en los sectores socialmente mejor colocados una función estratégica de custodio de ciertas valiosas posibilidades (la esbeltez femenina, la potencia sexual masculina, la juventud prolongada) que el roce de los años amenaza y que los más pobres no tienen tiempo ni medios de defender.

También en las etapas que la economía y la sociedad conocieron tras la Segunda Guerra Mundial la abogacía ha ejercido a determinadas alturas de su estratificación gremial una función relevante. Es ampliamente detectable el proceso de eslabonamiento entre un número relativamente limitado de grandes estudios, los directorios bancarios e industriales, los negocios independientes de exportación e imposición y ocasionales desempeños de un "rol" político-administrativo (a nivel ministerial, grandes comisiones asesoras, etc.) que pueden incrementarse abruptamente, como ha ocurrido en el período posterior a 1967. En funciones no fácilmente deslindables de ejecución y asesoramiento, el abogado asume para la constelación de poder económico el papel insoslayable de brújula para orientarse en la maraña legal y poder evadir sus constricciones. En estrecho concierto con el contador, el abogado se hace en esa situación el que articula, convincente y pulidamente, los reclamos de los "grupos de presión", el que es capaz de hacer manejables las confusas pragmáticas sobre el comercio exterior, la destreza apta para reducir a la mínima expresión posible el pago de los impuestos. También, pero esto se juega en un círculo aun más reducido, es el intermediario de la inversión exterior y quien procesa su curso ante la administración pública; igualmente, aunque el área se reduce aun más, el "merger", el experto en las fusiones y dispersiones (casi siempre "non sanctas") con que se traduce la creciente concentración y a la vez invisibilización del poder económico.

Resulta muy factible sostener que este núcleo profesional no tiene "poder por sí mismo" sino más bien un sistema de facultades delegadas de entrelazamiento y gestión. Pero, a cierto nivel del desarrollo económico, su función lo hace tan imprescindible que toda la naturaleza de las bases de la autoridad y la relación función-poder puede, a su propósito, replantearse.

En una sociedad del tipo de la uruguaya el prestigio de tal grupo humano es alto y si una prueba fuese necesaria de que ello ocurre también en la nuestra, atiéndase a la inclinación universal de la prensa a honorificar con el doctorado (a veces con un inverificable "profesorado") a cualquier nudo señor accedido a funciones públicas. Pero, asimismo, dentro del grupo social global, vale la pena observar el aura especial que rodeó en el pasado a los "civilistas" y al presente a los "comercialistas", así como la consideración dispensada a "constitucionalistas" e "internacionalistas". Esta última no es casual, pues constituye síntoma valioso de toda una concepción de la acción social que prima los valores de un "formalismo", un "literalismo" y un "idealismo" capaces de actuar de fuerzas congeladoras del "status", de pantallas de ocultación de sus más gruesas, chocantes demasías.

ELITES EMERGENTES Y "CONTRA - ELITES"

LA ELITE RELIGIOSA

Puede resultar extraño que los dirigentes eclesiásticos (y concretamente, hasta casi nuestros días, los de la Iglesia Católica) sean colocables dentro de estas categorías. Sin embargo, tal es la situación que parece corresponder con más exactitud a la condición del país, por lo menos desde el último cuarto del siglo pasado. La hondura del proceso de secularización cumplido, la debilidad de la articulación política de los sectores católicos, su desfasamiento creciente con las tendencias y corrientes ideológicas que dominaron en el ámbito del poder estatal desde 1880 lo explican, de modo muy cumplido. En este sentido la laicización formal de toda la sociedad uruguaya culminada entre la primera presidencia de Batlle y la segunda Constitución nacional (1917) no hizo sino ratificar una ostensible relación social de fuerzas.

La Iglesia y sus dirigentes han mantenido, no obstante, a todo lo largo del Uruguay moderno, una apreciable acción de influencia —social, ética, cultural— sobre un sector poblacional de magnitud. Es posible que su incidencia mayor se haya ejercido (y se ejerza aun hoy) sobre los restos de las viejas clases alta y baja tradicionales, las clases medias y altas rurales y algunos núcleos inmigratorios de origen europeo (español e italiano, pero también francés, alemán, etc.) y sus descendientes.

En contraste también con la proveniencia social de casi todo el alto clero latinoamericano ha sido norma casi sin excepciones que el nuestro se haya reclutado regularmente en una clase media de tono pequeño-burgués, actividad comercial o chacarera y antecedente español e italiano. Al menos así es lo que ocurrió tras el patricio Larrañaga, con las personalidades más notorias de la jerarquía eclesiástica uruguaya, desde Jacinto Vera y Mariano Soler hasta Juan Francisco Aragone, Antonio María Barbieri y Carlos Parteli. Con este último, sin embargo, se marca probablemente el primer caso, desde Larrañaga, de que un dignatario eclesiástico traspase con su prestigio las estrechas fronteras de la sub-sociedad clerical y que, al compás de profundas transformaciones eclesiales a nivel universal, adquiera relevancia ante el país entero y, en especial, ante sus sectores más esclarecidos y dinámicos.

LA ELITE INTELECTUAL Y LA EDUCATIVA

La caracterización del "intelectual" y de un sector homogéneo que lo incluya representa uno de los puntos más debatidos de la sociología de los grupos y de la teoría de la cultura. Quede estipulado aquí, simplemente, que consideramos "élite intelectual" a los más destacados entre el conjunto humano de creadores o adaptadores de

ideas, contenidos, imágenes, expresiones y formas culturales, identificados por el nivel de sus "logros" y no por ser titulares de una posición institucional cualquiera. No sucede lo mismo con los educadores y su función trasmisiva al frente de las redes institucionales de la enseñanza superior y media. Juzgamos también incluidos en el lote a escritores (de "literatura", historia, determinado nivel de periodismo), científicos (físico-matemáticos, naturales, sociales), artistas plásticos y compositores y algunas "celebridades del espectáculo" (actores, folkloristas, etc.).

No es frecuente la existencia de estructuras sociales concretas que integran al "intelectual" en la constelación dominante de poder ni es sin graves daños y contradicciones que algunos de ellos (y esto por períodos más bien breves) lo hacen. Como se comprenderá, punto de dilucidación compleja y acometimiento polémico es éste, puesto que se relaciona con temas tan candentes como el de la revolución, las concepciones normativas de la misión de la inteligencia y la índole clasística (y aun el alegado "desclasamiento") del intelectual.

Valga por extrema abreviatura recordar aquí que mientras la función intelectual representó durante el siglo XIX uno de los múltiples deberes del patriciado, se desplazó durante el XX hacia las nuevas capas medias, dentro de un espectro que iba desde una tradición comercial o burocrática bien asentada hasta una pequeña burguesía con tendencias al desclasamiento. Fue rasgo general, sin embargo, el de que el intelectual, y en especial, el escritor y el artista, haya asumido en la sociedad uruguaya de nuestra centuria una significación más bien honorífica y decorativa —cuando alcanzó efectivo destaque— que de real "influencia", de incisivo, movedor "prestigio". A ello contribuyó tanto la precariedad de medios materiales de una colectividad semidesarrollada como el carácter europeo (no sólo de origen sino incluso de cuño, de sello) de las ideas y las formas concretamente influyentes. A esta norma general sólo escaparon —puesto que no eran sustitutos de nadie— algunos historiadores (desde Bauzá y Acevedo hasta Blanco Acevedo y Pivel Devoto) y determinados periodistas, como ocurrió en los casos del mismo Acevedo, de Antonio Bachini y, sobre todos, en el de Juan Andrés Ramírez.

Hasta casi nuestros días, tal en regla general y con tales excepciones, la situación general de la élite intelectual del país puede sintetizarse de esta manera.

Sin que falten las transiciones, un salto cualitativo (según historia más de una vez contada y muchas mal) lo representó el ahondamiento de la crisis nacional en los años de la segunda postguerra y la emergencia de una nueva generación intelectual hacia mediados de la quinta década. Entonces sí, en un juego de interacciones en las que sería ocioso establecer prioridades, las coordenadas antes aludidas, el ensanchamiento y la nacionalización del mercado productor-consumidor del libro y, en primer plano, una acuciante necesidad de inteligir como grupo humano situación y destino, engranó, por así decirlo, la producción intelectual del país en un circuito vivo de ofertas y reclamos. Los mismos nombres eminentes de generaciones anteriores, respetados y reverenciados a veces pero de influencia puramente nominal, las figuras más valiosas de las promociones cercanas, los líderes culturales de la generación nueva alcanzaron un prestigio efectivo, lograron una audiencia modesta, pero auténtica, de los que nunca el intelectual uruguayo había gozado. Se modeló, en suma, tanto en términos conceptuales como imaginativos, una figura de la nación y la sociedad uruguayas, una nueva interpretación de su pasado, un diagnóstico de su presente.

Al ritmo de la agudización de los antagonismos latentes en la colectividad que constituimos, del descaecimiento de las hasta entonces aceptables apariencias de su decoro, otro fue el público potencial que logró conquistarse que aquel que no fueron capaces de hacer suyo las anteriores promociones. El nivel social superior siguió mostrando, más que sus pares de América del Sur, una estolidez, un desinterés cultural y una impotencia o inquerencia de producir en este plano (salvo en lo utilitario de las "profesiones") figuras de relieve. La clase media baja o "pequeña burguesía", la clase media en general, los nuevos sectores técnicos y profesionales, la generación más joven, los grupos más radicalizados y perceptivos de la élite obrera y estudiantil fueron los rubros con que se acreció el público consumidor de esa producción cultural que sentía como necesaria a su asentamiento humano y social. La "contrasociedad" en suma, y dicho en esquema, acogió hacia sí una "contra-élite" que a su vez contribuye a vertebrarla en viva y no siempre pacífica tensión dialéctica. Mientras tanto, la duermevela de las instituciones culturales del Estado, su irreversible nominalidad y fenómenos tan simbólicos como el fin del Ateneo de Montevideo, otrora prestigioso, prueban —por si falta hiciera— que no existe en el Uruguay otra cultura que la que en esa "contrasociedad" se involucra.

LA ELITE SINDICAL

Desde la legendaria F. O. R. U. (1905) hasta la actual C. N. T., la labor organizativa de la clase obrera fue suscitando la promoción de un sector dirigente sindical. De éste se extrajo el personal gestor de las sucesivas centrales. El carácter de este personal forjado en la lucha contra el poder empresarial y los mecanismos represivos del Estado, pero también en complicadas pugnas individuales y de grupo, ha dependido siempre de una serie de variables. Entre éstas asumen relevancia especial la índole de las ideologías normadoras (anarquismo, marxismo socialista o comunista, reformismo pragmático, etc.), las relaciones partidario-sindicales (con los partidos tradicionales, con el socialista y el comunista), los comportamientos y actitudes gubernativas ante el propio aparato sindical y el entramado legal, por fin, que en determinados períodos convoca la participación obrera y empleada (caso del cuarto de siglo que parte de 1941) y en otros la rechaza hasta la negativa misma de todo diálogo.

Entre tales coordenadas se fueron dibujando diversos tipos de dirigente, desde el líder de choque de los tiempos heroicos de las primeras y duras huelgas hasta el responsable gremial ducho en organización, propaganda y negociación que reclamó la serie de leyes que tuvieron su punto de partida en el Consejo de Salarios (1943). No habiendo alcanzado aun el sindicalismo uruguayo esa densidad estructural, magnitud y control de los canales de participación que en sociedades desarrolladas promueven una auténtica burocracia sindical con alto nivel de vida, dígase entonces que el dirigente gremial de nuestro medio, sólo independizado a medias del peso de sus tareas originarias, carente de un "status" de tipo burgués, sometido a persecuciones como las que sufre al presente, se encuentra muy lejos del "boss" sindical que conocen los Estados Unidos y Europa y aun la Argentina de determinados períodos. En cuanto al nivel de vida e ingresos el anterior aserto admite la excepción de los dirigentes de algunos sindicatos amarillos o amarillentos, en especial los conectados con el conservador sindicalismo oficial norteamericano (A. F. L. - C. I. O.) y sus variados tentáculos internacionales.

HACIA UN SECTOR DIRIGENTE

Tales son los topes de los compartimientos funcionales que en el Uruguay de hoy pueden relevarse. Los cuatro primeros componen y aun vertebran esa "clase alta" que la opinión más autorizada aprecia, según sondeos parciales de estratificación, en un 2 % de la población del país. Los dos últimos se sitúan como núcleos de una "contra-élite" posible y en curso de formalización. Los cinco intermedios tienden a bifurcarse entre la integración al sistema dominante de poder y el adensamiento de las "contra-élites" no sin una ancha zona intermedia de perplejidad de ideas y comportamientos.

Centrando nuestra atención en el primer lote recortémoslo, como corresponde, de la capa social "dominante". De esa capa componen la porción gestora, el sector más activo, dinámico, decisivo. Es posible calcular que sólo un décimo de la clase dominante "dirige" efectivamente. Es un 0,2 % de los uruguayos. ¿Qué representa como concentración de mando y cómo califica la estratificación social del país?

En proceso político-social tan móvil como el uruguayo del presente, con la incidencia de "variables coyunturales" de inusitada fuerza, cualquier conclusión sintetizadora, por más que ella apunte a realidades de estructura, corre grave riesgo de falibilidad. Como la tarea, empero, no es eludible, postulemos, sobrentendida la mayor cautela, algunas aseveraciones fundamentales.

Según ya se dijo y trató de fundarse, el Uruguay no conoció nunca este tipo de cima de la estratificación social que representó la clásica "oligarquía" latinoamericana. Sólo un empleo generosísimo de la analogía puede señalar entre nosotros estructuras de poder y procesos de decisión del carácter de los que registró regularmente el Chile del siglo XIX, la Argentina del mismo período y de casi todo nuestro siglo, Colombia prácticamente sin interrupciones.

En esta operación de previo descarte, el otro extremo del área a examen se acota aun con más facilidad. Pues parece obvio que, a mucha distancia de una sociedad industrial moderna, madura, no conoce el país la pluralidad de "élites funcionales", de sectores dirigentes parciales que según la mayor parte de los modelos al uso ese tipo de sociedad involucra. Y como estos "modelos" —las comillas son intencionales— tienden a soslayar la estrecha trabazón que entre algunos de esos sectores existe, digamos también que en una sociedad semidesarrollada y dependiente no es registrable tampoco ni la sustancial identificación entre el sistema empresarial y el "establecimiento" militar que alcanza hoy su perfección en los Estados Unidos ni la ostensible primacía del aparato político-partidario que caracteriza el régimen de "partido único" del tipo de la Unión Soviética. Es decir: ninguno de los rasgos de los ejemplos más estables en las variantes capitalista y socialista de las formas de modernidad social.

LA HIPOTESIS GENERAL

En la recapitulación de los varios sectores dirigentes ya adelantamos en parte la hipótesis que aquí, aun cautelosamente, formularemos sobre la firmeza de asentamiento de los sectores dirigentes. Y es la de que, sin perjuicio de la ostensible movilidad que el grupo decisivo rural tuvo en el pasado, las élites dirigentes bancario-comercial y agropecuaria parecen mucho más asentadas que en décadas anteriores y algo más estables que la industrial y la de los medios de difusión. Todas ellas, en fin, y es fenómeno común en los grupos titulares de la riqueza, son con seguridad harto más consistentes y fijas que las restantes, con todas las excepciones que haya que admitir. Se encuentran, además, en un proceso casi terminado de entrelazamiento y unificación sobre el que habrá que volver. En las siete selecciones dirigentes no-económicas es, sin embargo, perfectamente posible inferir que el antecedente familiar, las ventajas del ambiente, las tradiciones y las conexiones paternas pesan en el país con el peso que incluso suelen poseer en sociedades no capitalistas. A esta norma dominante sólo habría que hacerle la obvia exclusión del sector religioso y la casi segura de la élite sindical. En cambio, debería dotársele de un énfasis especial en el nivel superior militar, en el profesional y, especialmente, en el político, donde no cabe ya hablar sólo en singular cuando nos referimos a las "familias dinásticas".

LAS FUERZAS UNIFICADORAS: EDUCACION, ESTILO DE VIDA E IDEOLOGIA

Nuestro sistema educacional no concurre espontáneamente a robustecer vínculos endogrupales de un sector superior. Piénsese, por contraste, en la influencia de las "public schools" inglesas o en las universidades de la "Ivy League" estadounidense. Mientras universidades "libres" (privadas) o la "Universidad del Norte" no puedan erigirse en semilleros de tecnócratas integrados al sistema, los jóvenes de clase alta accedidos a la Universidad reciben una enérgica impronta desclasadora ante la que, a falta de resistencia ostensible y frontal, sólo ha cabido regularmente el agremialismo y la reticencia. A nivel de la enseñanza primaria o secundaria pudieron oficiar con más eficacia la función de centros de formación los colegios y liceos católicos más prestigiosos, caso del "Sacré Coeur" para el sexo femenino y el "Sagrado Corazón" (Seminario) para el masculino. Pero esa eficacia fue relativizada durante prolongado lapso por la inclinación agnóstica de una parte de los

sectores elevados. Y aun debe sumarse a este factor la resultante de una de las más restallantes contradicciones espirituales de nuestro tiempo. Es la que se configura entre el hecho de que mientras —de 1945 a 1955 más o menos— las clases superiores de Occidente (la del Uruguay incluida) se "convirtieron" casi masivamente buscando una anhelada legitimación de su poder frente a reales y aun supuestas amenazas, los grupos más lúcidos de la Iglesia aceleraron una denodada tarea para desimplicarla de esa función que, es indudable, por siglos ha cumplido. De aquí hay que decir que el disenso —estimulante disenso ahora— se estableció de nuevo a nivel de la educación, puesto que no lo anulan los móviles supérstites —aunque todavía fuertes— de arribismo social que llevan a las instituciones más selectas de formación religiosa.

Ese margen abandonado por ellas podría —cabe pensar— ser ocupado por los colegios de origen extranjero y si bien a la altura de primaria en buena parte lo hacen son demasiados y —salvo alguna excepción— no bastante calificados para cumplir plenamente el "rol".

Con todo, la clase alta sufre siempre un proceso de socialización interna a través de su convivencia física en centros y lugares escogidos, de su participación en pautas de conducta, maneras, preferencias y valores y un tipo de vida y consumo comunes. Sobre este lote de temas cabe siempre realizar alguna incursión de sociología y psicología social más o menos impresionista, del tipo de las que han realizado, del otro lado del río, Sebreli y Mafud. Una labor casi siempre exitosa, si las hay, porque a la clase alta le encanta sentirse retratada y aun calumniada, en tanto el resto social de los "buscadores de status" —la masa entera, virtualmente, de la clases medias— hurga en esos retratos modelos viables de su anhelado ascenso.

Sin caer en la parodia de este género, anótense estos elementos que creemos importantes:

a) en las sociedades tradicionales existía casi siempre un sector (una aristocracia, un patriciado ciudadano) que funcionaba como dechado de comportamientos y maneras. En una sociedad marginal semidependiente la pauta está dada por el conocimiento de las normas de vida y consumo ostentoso que lleguen a través de los canales de difusión de noticias desde las sociedades opulentas. (Perceptiva del fenómeno, la publicidad comercial ha hecho una costumbre insistir cada vez más en el alto nivel de la clientela potencial a la que la oferta de un producto se dirige.) Igualmente, aunque en grado menor, pesan los contactos aun esporádicos con los sectores extranjeros (la clase alta es la más cosmopolita de todas) y también los hábitos de algunas colonias extranjeras prestigiosas en el país. La inglesa llenó este papel de modelo durante casi un siglo pero la crema argentina, en especial durante los veranos en el este, ha cumplido y cumple aún una función "ejemplar" considerable.

b) Los hábitos de vida y consumo constituyen un elemento caracterizador solvente pero de relativa movilidad dado el alto impacto que los fenómenos de la moda poseen en ellos. Con estas reservas, enumeremos:

Zonas de vivienda: tras el prestigio del Prado y la Ciudad Vieja hacia el 900, (el del primero sobrevive), se dio la dirección hacia Pocitos y la zona del Bulevar Artigas; hoy son advertibles la alta cotización del Parque Batlle y Carrasco, en especial Carrasco Este, centro, además, del domicilio diplomático. Con todo, debe presumirse que la clase alta de Montevideo ofrece un índice de dispersión residencial bastante alto.

Lugares de veraneo: grande ha sido siempre la función de las playas en la conformación del sector elevado, sobre todo en el caso de Pocitos entre



Club Uruguay: apogeo y decadencia de la sociabilidad señorial.

1900 y 1920, de Carrasco entre 1920 y 1940 y de Punta del Este tras esa fecha. Como la expansión hacia el noreste no ha sido por ahora posible, se ha producido en la última algo así como una "estratificación dentro de la estratificación" que prima determinadas zonas (Pinares, barrio del Golf, la Draga, el lomo de la Ballena, las rocas de la Punta, etc.), aunque no sea notorio todavía, salvo desde las calles más comerciales del centro, el abandono de las antiguas residencias. El mismo fenómeno antes mencionado se registra en los clubes veraniegos (caso de la prolongada superioridad del "Médano" respecto al "Country", eminentemente mesocrático, y de algunas tentativas sucedáneas de los últimos tiempos).

Clubes y centros: tras la larga decadencia del "Club Uruguay", el único que llenó tal vez hacia cierta época los extremos exigibles de una congregación de clase alta, tras el "Círculo de Armas" en que se reunió parte de la élite política, jurídica y judicial, el "Jockey Club" y el "Club de Golf", mucho más abiertos, no los reemplazan cabalmente. El prolongado éxito —puesto que parte de 1942— del último en resistir el desalojo de su presente asentamiento da sin embargo una medida del poder de sectores restringidos en evitar la ejecución de medidas capaces de lesionarlos.

Desplazamientos y medios de comunicación: los múltiples y breves viajes del estilo ejecutivo han sustituido las largas permanencias de "la familia en Europa", aunque los "safaris" en África y las giras por el Egeo parecen representar un nuevo nivel cualitativo. En materia de automóviles más bien que el ostentoso y brillantemente cromado carro estadounidense se prefieren los coches chicos, con preferencia varios (para la mujer, para los hijos), y el "jeep" o camioneta para el campo. Se generaliza el uso del "yate" (aunque mucho menos que en la Argentina) y en especial del avión, cuyo empleo experimentó un brusco ascenso entre 1956 y 1959.

Deportes: la pasión comunitaria por el fútbol ha sido obstáculo fuerte a la diferenciación clasista de los deportes. Sin embargo la generalización del "fin de semana" ha amenguado bastante esta identidad. Además, y como es obvio, el polo es deporte predilecto de las generaciones jóvenes de la élite agropecuaria. También es distinción social el "rugby", y el golf y la caza son a su vez los ejercicios preferidos de años algo más maduros.

Comportamientos y preferencias: es común en la clase alta contemplar la eventualidad de situaciones adversas; de ahí deriva la práctica, por ejemplo, de "preparar a las hijas para una época difícil" y de los estudios de secretariado. En gustos adquisitivos se ha hecho tan común en el Uruguay como en todo Occidente la pasión por las "antigüedades". Esta pasión ha provocado la multiplicación de los comercios dedicados a ellas y el prestigio social cimero de las grandes jornadas de remate de colecciones ya formadas o de patrimonios sucesorios. Ascendente es el coleccionamiento de pintura —ahora nacional o argentina— y no de los malos cromos académicos españoles o italianos que adquirían nuestros antiguos ricos. También está en pujante alza el allegamiento de platerías, en especial la colonial y la criolla.

De gustos adquisitivos hablamos. Es poco notorio en cambio el gusto por el desprendimiento. Sin que falten a nuestra afirmación excepciones, hay pues que observar que no ha tenido sucesores la notoria actividad beneficente de un matrimonio Rossell y Rius - Pereyra, un Gallinal, un Saint-Bois, o un Beisso. Familias enteras, billonarias, no aparecen involucradas en acto alguno de dadivosidad.

La actitud ante los bienes económicos nos remite fluidamente a los comportamientos estrictamente éticos de la clase dirigente. Sin posibilidad de explayarnos tampoco en este punto, digamos que ellos parecen ser los relativamente bajos comunes hoy universalmente, aunque tal vez valiera observar la relativa marginalidad uruguaya a los hábitos más estentóreos, escandalosos de los "happy few" europeos o norteamericanos. En materia, sin embargo, de conductas económicas, los repetidos escándalos de la última década (fraudes con la exportación y las divisas, "cracks" bancarios, contrabandos, devaluaciones, estafas variadas) parecen marcar una postura más predatora y desaprensiva que la que fue tradicional. Representan una variante a la que bien pueden haber contribuido tanto las exigencias por el triunfo y sostén entre las mallas de una muy corruptible "economía dirigida", como una percepción —tal vez exagerada en lo inmediato— de la inseguridad del "status". Y aun podría decirse que ese deterioro moral se marca, más aun que en los comportamientos delictuales mismos, en la falta de contricción de los involucrados y de sanción, por lo menos registrable, de su medio.

Bastante inmune se encontró también nuestro alto nivel social al snobismo nobiliario a que tan susceptibles han sido las élites norteamericana y argentina, lo que puede estar relacionado con lo relativo de su poder económico medido a escala internacional. Las excepciones, que las ha habido y en especial en el escalafón diplomático, han sido por lo habitual objeto de amable burla. Existieron y existen, sí, los persistentes pescadores de condecoraciones y, desde 1965, una infracción mayor a esta dominante la constituye la reiterada relación con la Orden de Malta y el aprecio por los perendengues que ésta distribuye a buen precio.

Ideología: pocos o ningún ingrediente original se hace presente en el sistema justificativo de ideas que sostiene el nivel social superior uruguayo que, tal vez desde Carlos Reyles e Irureta Goyena, no ha tenido ninguna capacidad medianamente distinguida para articular airosamente sus convicciones e intereses. Por ello el material ideológico es, prácticamente sin elaboración, ya el que produce copiosamente el capitalismo monopólico norteamericano, ya el que emiten también sus filiales intelectuales argentinas. Respecto al de primer origen sus auspiciadores no se detienen, ni mucho menos, en el clamoroso desajuste que la distinta calificación de los ámbitos económico-sociales le imprime.

PREDISPOSICION ESTRUCTURAL Y COYUNTURA

Páginas atrás concluimos la retrospección de una relativa dispersión del poder con la expresión "hasta casi nuestros días". Vale la pena preguntarse cuáles han sido las vías por las cuales se ha llegado desde hace dos o tres años a una configuración de poder sospechosamente parecida a una élite, a una cima unificada de dominación política, económica y social.

En una comunidad pequeña, insuficiente, económicamente dependiente como la que el Uruguay constituye no es posible explicar ningún fenómeno decisivo sin tener en cuenta primaria y decisivamente la incidencia de la "variable externa" cuya importancia debatieron Jean Meynaud y Raymond Aron en el caso seguramente menos ostensible de las "categorías dirigentes" italianas. Pero tampoco en sociedad alguna —pequeña o grande, dependiente o autónoma— cabe la explanación de cambios cualitativos en la estructura del poder si ésta no se inscribe en el proceso social entero y en las funciones y logros económicos que lo sustentan.

Si se tiene en cuenta la aceleración desmedida del proceso inflacionario que se remonta a los años cincuenta y la ostensible inviabilidad política de la terapéutica ensayada hacia la mitad de 1967, la opción —una opción sustancialmente radical— entre dos alternativas parecía inescapable. Casi obvio parece recordarla: elegir entre "cambios estructurales" según el consagrado estereotipo, o la "estabilización".

Queremos decir en suma: por un extremo, drásticos emprendimientos de remodelación de la colectividad, "radicales", en cuanto fueran a la raíz de las rémoras; totales, en cuanto no dejaran sector nacional al que no alcanzaran; sincronizados, en cuanto periodizaran cuidadosamente la puesta en marcha de la colectividad según nuevos ritmos y nuevas metas. No importa demasiado subrayar aquí, puesto que no fue ésta la opción escogida, qué identidad esencial presentaba (presenta siempre) una decisión de tal suerte con el cambio literalmente revolucionario ni qué premios y costos representa ni qué posibilidades le brindaba la temible inserción del país entre dos dictaduras castrenses de signo regresivo y el talante más bien apacible y conservador de una población nacional que parecía (y aún parece) bastante lejos de la aptitud de optar lúcidamente por los sacrificios que una transformación de tal orden involucra. Más superfluo resultará aun destacar el alto poder de veto económico que ciertos sectores —el ganadero y el bancario— ostentan y que tan abiertamente se mostró al provocar el fracaso del poco realista ensayo de mediados de 1967 (castigar impositivamente a los núcleos de alta concentración dineraria para lograr, ya un firme equilibrio presupuestal, ya, a través de cierto tipo de tributos, una incentivación productiva liberatoria o compensatoria que incidiera en la raíz del proceso; enlentecer, en este contexto, el ritmo de reclamos sociales, y, por él y en lo que le tocara, el de la inflación). Agréguese todavía, por si estas limitaciones fueran pocas, una más. Una más, que por cierto no es dispensa sino identificación con la grave, gravísima responsabilidad emergente de todo lo que seguiría. Es la de la propia conformación ideológica (o falta de ella), la de los reflejos, los intereses, las solidaridades establecidas o a establecer por los que poseyeron desde entonces el poder formal, legal, efectivo.

Existe jurisprudencia universal sobrada para haber oteado, desde el momento en que se le eligió, las consecuencias sociales del otro término de la alternativa que la estabilización (pese a su posible justificación) representa. En un cuadro de estan-



Pocitos y 1920: comienza hacia el Este la deriva veraniega de los símbolos del "status".

camiento económico y de conservatismo social del que la misma estabilización es instrumento, resulta casi pleonástico decir que ella se costea inevitablemente con los ingresos reales de los niveles medios y de los más desfavorecidos de la población y que la represión —variable en "maneras" pero inexorable también— es el correlato de toda resistencia, por mesurada que sea, de los estratos sociales afectados más gravemente.

No será la presente la primera vez que se señala que tal política representó la clausura de toda una larga etapa de la vida uruguaya en cuanto ella estuvo caracterizada por un extenso "regateo" de las decisiones económico-sociales esenciales, por un complicado "compromiso" entre todos los sectores sociales involucrados, de los que surgía un equilibrio relativo pero también una poderosa fuerza legitimadora.

Extensos núcleos de población sienten tan drástico cambio como una pérdida irremediable; menos cuantiosos son quienes contemplan en él un duro pero tónico y promisorio desnudamiento de los antagonismos sociales que aquel estilo embozaba.

APOGEO DEL "INTRUSO POLITICO"

Pero como es el alto nivel dirigente el que aquí nos importa, es esencial subrayar que una política de tal naturaleza necesita quienes la cumplan, quienes la implementen. Y aquí toco el punto central de mi tesis —seguramente discutible— sobre el sector dirigente uruguayo. Tal tesis, explícitamente, conlleva la afirmación de una "predisposición estructural" de los altos niveles sociales a cuajar en "sector dirigente unificado", una predisposición que en toda estratificación de clases según pautas capitalistas está siempre latente. Pero esta predisposición estructural hubiera seguido siendo tal si no se hubiera dado una "coyuntura" especial que actualizó tal potencialidad y que está representada entre nosotros tanto por los fenómenos antes aludidos como por la variable que poco más abajo se individualizará.

Se ha discutido hace poco qué móviles pueden llevar a una clase propietaria y empresaria a apoyar una política económica estabilizadora y a ajustar (relativamente) a ella sus comportamientos. La pregunta cabe, en especial habiendo sido tan obvias las ventajas, de muy fácil recapitulación, que le deparó una etapa agudamente inflacionaria. Es de creer, empero, que tal óptica de examen descarta demasiado ligeramente la pertenencia de las clases a una sociedad global y el peso de las experiencias comunes respecto al que pueden tener las originadas en la condición peculiar del obrero, del empleado, del industrial o del estanciero.

Decisivas unas u otras razones, lo cierto es que hacia fines de 1967 el elenco político dirigente fue siendo desplazado pausada pero firmemente de los altos cuadros de mando por el nivel empresarial. El recurso, la apelación a las luces y el apoyo de las "fuerzas vivas" —una expresión que no se empleaba desde los tiempos del fenecido riverismo— se hizo casi cotidiano. La acción empresaria transferida al gobierno importa modalidades muy específicas y el optar por ella ya implica también escoger por un estilo de comportamiento político. La irrupción del "intruso político" —como le llama la sociología del poder de Mills al magnate económico que salta desde la desimplicancia a las más altas responsabilidades del Estado— arrastra tras de él, de modo general, determinada perspectiva. Es una perspectiva de tipo "productivista" gerencial y aun exteriormente tecnocrática, desde la que se centra la atención en el logro de ciertas metas cuantitativas y desde la que son, por esencia, indiferentes los efectos secundarios, en especial los sociales, los concretamente humanos, que la implementación acarree. La ac-

ción del técnico, en su estado puro, suele participar de estas características, pero el técnico está habitualmente flanqueado por el político, su superior jerárquico, para moderar (también para malear) este esquematismo de las metas. Ocurren las cosas diferentemente cuando es el empresario el que ocupa el lugar del político y no hay, o no actúan enérgicamente, contrapesos que lo moderen.

Que no parecen haberlos parecería decirlo la misma desprejuiciada franqueza con que los investidos se vanaglorian de su fidelidad a su interés de origen y minimizan la incidencia de cualquier responsabilidad gubernativa. Se han recordado a veces las desafiantes palabras del ministro Frick en la inauguración de la muestra del Prado en agosto de 1968. No se ha atendido a las varias manifestaciones similares hechas antes y después de esa fecha, en especial las del ministro de Industria en diciembre de 1967.

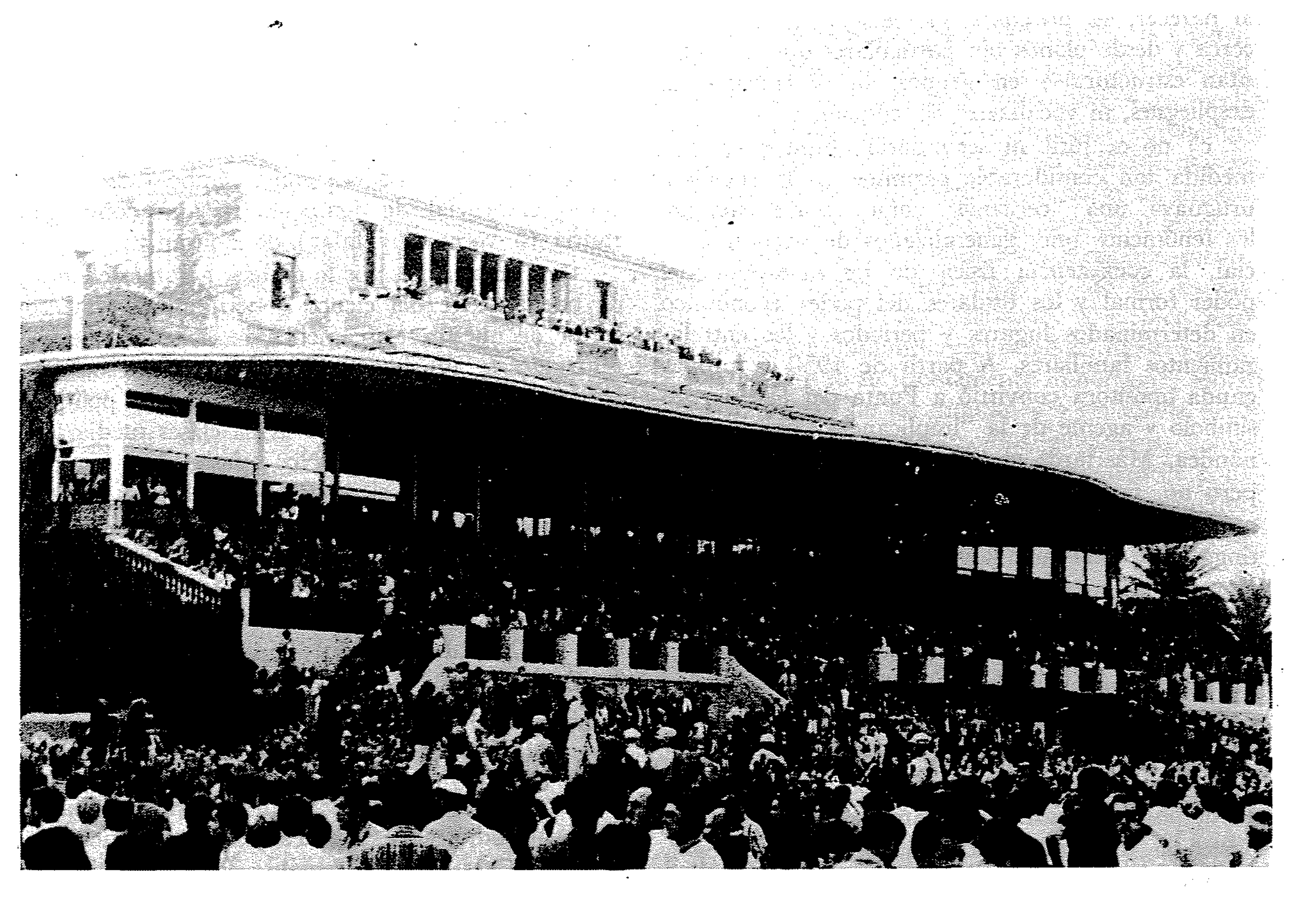
HIPOTESIS SOBRE EL COPAMIENTO

Preguntarse qué fue lo que provocó este ingreso masivo que apuntaron algunas selecciones de personal del general Gestido pero que tan desmedidamente se acrecentó después, implica, ni más ni menos, querer explicar coherentemente los drásticos cambios ocurridos últimamente en la estructura de poder político y económico del país. Sin intentar agotar la respuesta, observemos que la elección de una línea, socialmente dura, como la estabilización representa (sobre todo si para los ricos es una congelación de sus egresos pero para los pobres es la de sus ingresos) exigía la presencia de quienes estuvieran en condiciones de implementarla al margen del estilo de "compromiso" peculiar a todos los elencos partidarios y con total indiferencia respecto a sus consecuencias en una confirmación electoral futura que en esos elencos es su indisputable causa. Súmense a éstos los permanentes factores que explican que cuadros gubernativos de origen modesto o mesocrático orienten la acción estatal —al margen de excepcionales circunstancias— en beneficio de los estratos sociales ya más beneficiados.

Vale la pena marcar aquí la general y excepcional importancia de este fenómeno. Pues, si bien se le mira, representa la forma concreta, operativa, decisional del principio más amplio y más abstracto que ve en el aparato del Estado un instrumento de los poseedores de los medios de producción. Tal principio, cuya operancia en tantos casos puede importar una exageración y que obvia la importancia decisiva de un proceso democrático que su formulador no estuvo en el caso de conocer, puede recobrar en ciertas situaciones una vigencia aproximadamente perfecta. Se trata de coyunturas dadas en las que se aúnan un cuadro mundial de tensiones gravísimas dentro del sistema con un contexto nacional de estancamiento económico, descreencia ideológica y moral y drástico descenso del valor de "representatividad" de la estructura político-partidaria entera.

Si volvemos a ese nivel concreto, operativo, decisional de que se hablaba, basta traer a colación algunos fenómenos a que ya se ha hecho alusión y concebir simplemente su incremento y entrelazamiento multiplicador. Se puede llegar a una cima dirigente unificada con neto predominio de los sectores económicos de mayor peso si nos ponemos en condición de recordar o mencionar:

a) el mayor poder de compulsión, hasta llegar al veto literal que poseen los "grandes intereses" y a la convicción de cuánto más fácil es gobernar teniéndolos en cuenta y ajustando los planes a sus conveniencias. No se maneja aquí la posibilidad de una satisfacción íntegra de las demandas de esos sectores, concesión práctica y socialmente imposible.



Maroñas: en el "mitin de enero" una sociedad renueva sus ritos.

Pero piénsese también en las formas de poder de veto que en la recapitulación de los "sectores" —caso de la que representa la retención de la producción exportable— registramos;

b) la cercanía infinitamente mayor a los centros de decisión formal que poseen, en una sociedad de clases como la nuestra, los grupos económica-financieramente poderosos de la banca o de las agremiaciones agropecuarias. Cuando, no hace muchos años, la categoría de "grupos de presión" se vulgarizó y comenzó a emplearse como anatema contra los reclamos que distorsionaban el equilibrio económico, ella se aplicó a los organismos y agremiaciones obreras y de clase media. No involucraba,

al parecer, las presiones que se ejercen desde tan cerca y desde planos tan particulares que no necesitan estructurarse en grupos, ni visualizarse en despliegues, ni vocalizarse en peticiones;

c) no es fútil ni secundario apuntar en qué medida tan considerable permiten en la sociedad uruguaya una "cercanía" como la mencionada, los fenómenos muy generalizados de snobismo social, la coexistencia física de los investidos del poder formal y los titulares del poder económico en determinados lugares y períodos y los entrelazamientos familiares. A partir de 1950 la propaganda opositora convirtió a Punta del Este en un símbolo y agente de la "implicancia" político-económica. Más tarde el estereotipo perdió virulencia pero no, por cierto, el dato social de que se alimentaba. También aquí es honesto hacer el distingo entre el hecho (sobre el que pesan tremendamente los comportamientos femeninos) y la crasa aspiración a la riqueza personal por parte de los gobernantes institucionales. Pues esta pretensión, que ciertamente no falta en numerosos casos, no es políticamente inequívoca y puede traducirse (se dio en el proceso peronista) en corrientes que Max Weber llamó "prebendarias" y en acciones de despojo de los económicamente poderosos por parte de un séquito político con aspiraciones a reemplazarlos;

d) tampoco deja de poseer relevancia la usura de los móviles ideales, la flaccidez de las justificaciones ideológicas de la acción pública —que provocan al mismo tiempo el descaecimiento de las razones de sustentación de los grandes partidos nacionales— y las posturas "realistas", a menudo cínicas, que suele engendrar la operación política cotidiana. Sobre todo cuando ésta se cumple sin aquellos móviles o éstos son tan débiles que equivalen a su cabal ausencia;

e) sólo en casos de explícita, deliberada voluntad de cambio, o en cursos históricos literalmente revolucionarios (dos condiciones tan remotas a los mandatarios del Uruguay de hoy) pierde su prestigio social la riqueza privada, el respeto a ella como fuente de poder, como símbolo de éxito, como credencial de competencia, aun como garantía (a veces muy falaz) de honradez;

f) si se atiende, por lo demás, a la pertenencia de buena parte del elenco gobernante al extenso sector de nuestra clase media, se hace posible remitir a éste muchos de los rasgos psico-sociales, todos decisivos para su comportamiento político, que el análisis científico de estas clases medias ha ratificado con insistencia. Nos referimos en especial a su repulsión ante el desorden social, a su conservatismo, a la inestabilidad ideológica que la mueve entre el progreso y la regresión, a un "moralismo" que sanciona irregularmente y, al mismo tiempo que reprueba las concupiscencias, bastante innegables, de los cuadros partidarios y políticos o las "reivindicaciones" de los más desfavorecidos, acepta sin protesta formidables desigualdades de "status" y todas las compulsiones de la fuerza. El respeto de las clases medias por las clases altas ha sido materia de observación concorde por parte de los estudiosos. Y aun cabría una tipificación de las fuentes de este respeto (la actitud de los "satisfechos"; la de los aspirantes a un ascenso individual que consideran factible; la de los que viven del "esplendor carismático" que se efunde de las alturas...);

g) cuando este sistema de valoración general se encuentra con el fenómeno, muy habitual, de un desprestigio acentuado del elenco político (muchas, y muy tradicionales son las causas de este desprestigio) y cuando ambos hechos engranan en una específica coyuntura de endurecimiento autoritario, adquiere una incontrastable fuerza la

convicción de que es entre los grandes empresarios y técnicos a ellos vinculados (los "hombres de iniciativa", las "figuras de relevancia nacional") que se encuentran las "capacidades" que la acción de gobierno necesita;

h) supuesta en curso la tendencia anterior, es entonces muy fácil concebir que a los primeros "intrusos políticos" incorporados al alto nivel de decisiones les resulte relativamente fácil presionar por la incorporación de personal de idéntico signo. En un medio social reducido y sostenido por múltiples vínculos interindividuales la operación de calibrar las condiciones de los candidatos puede ostentar un alto nivel de seguridad. Esto hace posible presentar, ante una opinión pública ya previamente conformada, elecciones de gente verdaderamente idónea y aun difícilmente tachables desde el punto de vista ético, siempre que se soslaye la red de implicaciones que los envuelve;

i) si hemos hablado de gobernantes económicamente modestos, personal y presuntamente íntegros, originarios de partidos de tradición popular, esto representa el mero "tipo" o "modelo". A determinados niveles, y sobre todo al legislativo, es un fenómeno de gran amplitud pero también muy específicamente uruguayo el enorme desfasamiento que existe entre los intereses, los valores y perspectivas sociales de los representados y los de los representantes. Explanar los factores de tal discordancia sería entrar en el rico y complejo tema de la efectividad de la "democracia representativa". Ya se rozó el tema al principio de este trabajo y hacerlo ahora de modo más cabal importaría recorrer un capítulo de cargos más que secularmente engrosado contra la realidad y aun la posibilidad de esa característica. Subrayar la prima que para la carrera política de los económicamente poderosos significan los reflejos sociales jerárquicos de una sociedad de tipo tradicional como lo es buena parte de la del interior de nuestro país, insistir en el alto costo de la actividad electoral y su índole crecientemente inaccesible a las posibilidades de los de pobre o mediana condición, importan sólo dos ejemplos de un dilatado repertorio de fenómenos que convergen hacia un mismo resultado. Si los de escaso o regular caudal invisten de su representación política a los económicamente poderosos, es obvio que ninguna de las causas precedentes necesite ser relevante. Y si bien esto no ocurre con absoluta regularidad en nuestro país, la corriente es lo suficientemente importante, sobre todo en el caso de los diputados y senadores provenientes de los departamentos ganaderos, como para que la fortuna disfrute de un número de políticamente investidos desproporcionado en absoluto con la entidad numérica del sector más rico de la población.

LA FUERZA EXTERNA

Todas las fuerzas recapituladas en este recuento carecerían, tal vez, de impacto desencadenante si hiciéramos abstracción de la ya mencionada "variable exterior". El proceso social y político uruguayo no transcurre en una isla de poder; se cumple, por el contrario, en el flanco de un continente sometido a un destino común. Tampoco es posible aquí ninguna exposición extensa de este fenómeno y baste recordar que ese continente en cuyo costado sur-este nos hallamos es el área menos disputada, menos controvertida tácita o explícitamente por los restantes poderes, de la desmesurada potencialidad de los Estados Unidos. Esto, como es obvio, la convierte en el coto de caza más apacible y seguro que su sistema económico dominante posea fuera de su propio enclave. "Capitalismo monopólico", "neo-colonialismo", "imperialismo" y "pentagonismo" son términos que



The Embassy: la vasta red mundial envuelve los pequeños peces.

convocan intensa movilización pasional y son susceptibles de devenir entidades hipostasiadas hasta la mistificación.

Pero que el estereotipo sea el destino posible de toda evidencia socializada no atenta contra la fuerza misma de esta evidencia. A todos los niveles, y en todas las esferas, la "variable exterior" que representan las manifestaciones dominantes de la sociedad norteamericana afecta cualquier hipotética relación de fuerzas que dentro del área nacional misma pudiera calcularse.

No procede, por supuesto, detenerse en estas páginas en los fines, las urgencias, los peligros y los fracasos que marcan la acción de esa variable y le han dado su presente estilo de endurecimiento, perplejidad, desilusionado "realismo" y pregonada desimplicancia. Es, en cambio, como se decía, insoslayable subrayar la decisiva presencia del aparato oficial de los Estados Unidos en todos los ámbitos decisivos de la constelación de poder uruguaya. Abundante es ya el material de examen sobre el creciente proceso de dependencia económica que se cumple a través de la inscripción del país en la red financiera y bancaria de los organismos internacionales (FMI, BIRF, etc.) controlados por la potencia económica estadounidense o directamente por ésta, mediante la acción de sus instituciones propias. Todo el eslabonamiento de "cartas de intención" y "refinanciaciones" puede ser abreviado diciendo que él importa, prácticamente, el fin de todo margen de autonomía en la dirección política, económica y financiera de la nación. Pues si no implica, formalmente, la abdicación de la "soberanía", pone a las autoridades responsables ante una drástica opción: ahondar esa mediatización o provocar (en la concepción de una política cómplice o meramente no imaginativa) el desastre social y la falencia nacional. Se trata, brevemente, de imponer una "imagen del país", un prospecto ideal de la sociedad uruguaya que cohoneste, una vez impuesto, todo lo que se quiera. Y, como principio necesitan las cosas, se busca lograr su efectivación. La realización de tal imagen se presenta como la condicionante de un tipo y magnitud de ayuda cuyo beneficiario abstracto y mediato sería el Uruguay mismo y cuyo beneficiado concreto e inmediato es el sistema social y la relación de fuerzas implicada en él. Hay que decir que en esa imagen los arrestos, generosos si a veces poco fundados, de nuestro viejo "Estado de bienestar" son proscriptos con sardónico desprecio y que el "productivismo", el "libre-empresismo", el desmantelamiento del aparato económico estatal, la regimentación social, la hegemonía de un mercado teóricamente fluido que el plan preconiza, coinciden puntualmente con las conveniencias del poder económico estadounidense. También coinciden con las del poder económico uruguayo aunque más en grueso y no sin conflictos como los que ya se han agudizado entre el sector exportador primario y el "poder externo".

Ésta es la condicionante global de mayor entidad y, si ello es así, es dable situar en su justa función todos los otros lazos de dependencia involucrados en la corriente anestesiante de préstamos a corto y mediano plazo, en la trustificación del comercio exterior, en el deterioro de la relación de intercambio, en la práctica (hasta hoy vigente) de los créditos ligados, en el peso insoportable de los intereses y amortizaciones de la deuda externa, en la extranjerización de la industria y la banca, en el impacto de la remisión de ganancias, patentes, "royalties", etc., sobre nuestra balanza de pagos. Todo este espectro de fenómenos se ve facilitado por el mayor poder de constricción de la condicionante global pero es, al mismo tiempo, un factor decisivo de su operancia, el repertorio de sus instrumentos.

BIBLIOGRAFIA

a) General y latinoamericana

BOTTOMORE, Tom: **Elites and Society,** London, C. A. Watts and Co. Ltd, 1964.

LASWELL, Harold; LERNER, Daniel; ROTHWELL, O. Easton: **The Comparative Study of Elites: An Introduction and Bibliography,** Stanford University Press, 1952.

ARON, Raymond; PLAMENATZ, John; HASSNER, Pierre: **Revue Française de Science Politique,** An. XV, Nº 1, Febrero 1965.

LIPSET, S. M. y SOLARI, A. E.: **Élites y desarrollo en América Latina,** Buenos Aires, Paidós, 1967.

IMAZ, José Luis de: **Los que mandan,** Buenos Aires, Eudeba, 1965.

b) Uruguay

Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República: **El proceso económico del Uruguay,** Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1969.

Ministerio de Ganadería y Agricultura: **Situación económica y social del Uruguay rural,** s/f. (1962).

TRÍAS, Vivián: **Reforma agraria en el Uruguay,** Montevideo, Ediciones de El Sol, 1962.

TRÍAS, Vivián: **Economía y política en el Uruguay contemporáneo.** Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1968.

GANÓN, Isaac: **La estructura social del Uruguay,** Montevideo, 1967.

FARAONE, Roque: **La prensa de Montevideo.** Publicaciones de la Facultad de Derecho y C. Sociales, Montevideo, 1960.

MARTÍNEZ, José Jorge: **La telaraña bancaria en el Uruguay,** Montevideo, Ediciones Pueblos Unidos, 1969.

ERRANDONEA, Alfredo y COSTÁBILE, Daniel: **Sindicato y sociedad en el Uruguay,** Montevideo, Biblioteca de Cultura Universitaria, 1969, págs. 82-84.

PLAN DE LA OBRA

(Continuación)

25. MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN
Roque Faraone

26. LA CRISIS ECONÓMICA
Instituto de Economía

27. ÁRBOLES Y ARBUSTOS
Atilio Lombardo

28. LA PRADERA
Esteban F. Campal

29. EL LEGADO DE LOS INMIGRANTES - I
Renzo Pi Hugarte y Daniel Vidart

30. LA PRODUCCIÓN
Pablo Fierro Vignoli

31. PLANTAS MEDICINALES
Blanca A. de Maffei

32. LA ECONOMIA DEL URUGUAY
EN EL SIGLO XIX

33. HACIA UNA GEOGRAFÍA REGIONAL
Asociación de Profesores de Geografía

34. LA CLASE DIRIGENTE
Carlos Real de Azúa

35. LAS CORRIENTES RELIGIOSAS
A. Methol Ferré y J. de Santa Ana

RÍOS Y LAGUNAS
Raúl Praderi

EL LEGADO DE LOS INMIGRANTES (II)
Daniel Vidart y Renzo Pi Hugarte

LOS SERVICIOS DEL ESTADO
José Gil

LA NUTRICIÓN EN EL URUGUAY
M. Martínez Carril

EL TRANSPORTE Y EL COMERCIO
Ariel Vidal y Luis Marmouget

GEOGRAFÍA DE LA VIDA
Rodolfo V. Tálice y Jorge Chebataroff

ARTES, JUEGOS Y FIESTAS
TRADICIONALES
Equipo de antropólogos

LA SALUD PUBLICA
Gabriel Saad

LA ECONOMÍA DEL URUGUAY
EN EL SIGLO XX
W. Reyes Abadie y José C. Williman (h.)

EL PLATA Y EL ATLÁNTICO
Juan Soriano

PARTIDOS POLÍTICOS
Y GRUPOS DE PRESIÓN
Antonio Pérez García

LA VIVIENDA EN EL URUGUAY
Juan Pablo Terra

EL SABER Y LAS CREENCIAS POPULARES
Equipo de antropólogos

LA CULTURA NACIONAL
COMO PROBLEMA
Mario Sambarino

PERSPECTIVAS PARA UN PAÍS EN CRISIS
Luis Faroppa

LOS EDITORES PODRÁN, SIN PREVIO AVISO, SUSTITUIR CUALQUIERA DE LOS TÍTULOS ANUNCIADOS O ALTERAR EL ORDEN DE SU APARICIÓN

RESERVE DESDE YA EL PROXIMO VOLUMEN:

LAS CORRIENTES RELIGIOSAS

ALBERTO METHOL FERRE

EN RAZÓN DE LAS VACACIONES ESCOLARES, "NUESTRA TIERRA" APARECE DESDE EL VOLUMEN Nº 32 CADA DOS SEMANAS. A PARTIR DEL MES DE ABRIL LAS PUBLICACIONES DE ESTA OBRA ALTERNARÁN SEMANALMENTE CON LAS DE UNA NUEVA SERIE:

LOS DEPARTAMENTOS

EL INTERIOR RURAL Y URBANO DE NUESTRO PAÍS; SU PRODUCCIÓN AGRARIA E INDUSTRIAL; SUS HOMBRES Y SU PAISAJE; SU HISTORIA Y SU CULTURA.

PLAN DE LA OBRA

1. EL URUGUAY INDÍGENA
   Renzo Pi Hugarte
2. EL BORDE DEL MAR
   Miguel A. Klappenbach - Víctor Scarabino
3. RELIEVE Y COSTAS
   Jorge Chebataroff
4. EL MOVIMIENTO SINDICAL
   Germán D'Elía
5. MAMÍFEROS AUTÓCTONOS
   Rodolfo V. Tálice
6. IDEAS Y FORMAS EN LA ARQUITECTURA NACIONAL
   Aurelio Lucchini
7. EL SISTEMA EDUCATIVO Y LA SITUACIÓN NACIONAL
   Mario H. Otero
8. TIEMPO Y CLIMA
   Sebastián Vieira
9. IDEOLOGÍAS POLÍTICAS Y FILOSOFÍA
   Jesús C. Guiral
10. RECURSOS MINERALES DEL URUGUAY
    Jorge Bossi
11. ANFIBIOS Y REPTILES
    M. A. Klappenbach y B. Orejas-Miranda
12. TIPOS HUMANOS DEL CAMPO Y LA CIUDAD
    Daniel Vidart
13. AVES DEL URUGUAY
    Juan P. Cuello
14. LA SOCIEDAD URBANA
    Horacio Matorelli
15. INSECTOS Y ARÁCNIDOS
    Carlos S. Carbonell
16. LA SOCIEDAD RURAL
    Germán Wettstein - Juan Rudolf
17. EL DESARROLLO AGROPECUARIO
    Antonio Pérez García
18. SUELOS DEL URUGUAY
    Enrique Marchesi y Artigas Durán
19. HIERBAS DEL URUGUAY
    Osvaldo del Puerto
20. COMERCIO INTERNACIONAL Y PROBLEMAS MONETARIOS
    Samuel Lichtensztejn

    EL TURISMO EN EL URUGUAY
    Volumen extra
21. EL SECTOR INDUSTRIAL
    Juan J. Anichini
22. FÚTBOL: MITO Y REALIDAD
    Franklin Morales
23. PECES DEL URUGUAY
    Raúl Vaz-Ferreira
24. EL LENGUAJE DE LOS URUGUAYOS
    Horacio de Marsilio